

El gasto político oculto de corporaciones australianas

Bill Browne

Las empresas que cotizan en bolsa en Australia revelan poca información sobre sus gastos políticos, y pocas revelan gastos de lobby o pagos a asociaciones comerciales.

La mayoría no define políticas claras para abordar las donaciones políticas, el gasto político ni la puerta giratoria entre la política y los negocios. Ni la ley ni las normas bursátiles les obligan a hacerlo, y pocos lo hacen voluntariamente.

Estas son algunas de las conclusiones clave de uno de los análisis más detallados y exhaustivos jamás realizados sobre el gasto político corporativo en Australia. El Instituto Australia encargó a ISS-ESG1, proveedor de soluciones de gobernanza corporativa e inversión responsable, que evaluará la divulgación, las políticas y la supervisión del gasto corporativo de 75 de las 100 empresas más grandes de la Bolsa de Valores de Australia (ASX). Su informe, " Gasto político corporativo en Australia", se presenta a continuación de este resumen ejecutivo.

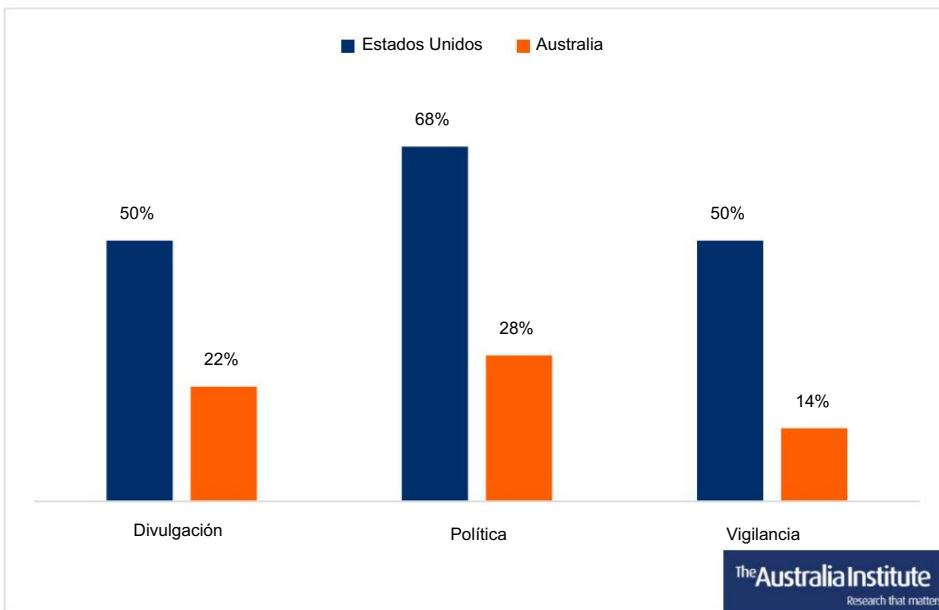
Las empresas se evaluaron con una versión del Índice CPA-Zicklin adaptada al entorno regulatorio australiano. El Índice CPA-Zicklin es un índice anual que evalúa al S&P 500 (un índice que rastrea a 500 de las mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa) en función de su divulgación, políticas y supervisión en relación con el gasto político corporativo. El Centro para la Responsabilidad Política (CPA) y el Centro Zicklin para la Gobernanza y la Ética Empresarial de la Universidad de Pensilvania publican el índice anualmente desde 2011.²

El análisis de ISS-ESG revela que las empresas australianas que cotizan en bolsa publican poca información sobre su gasto político. Ninguna empresa obtuvo una puntuación general del 50 % o más, y las puntuaciones medias de las 75 empresas fueron del 22 % en divulgación, el 28 % en políticas y el 14 % en supervisión. Una comparación con las empresas estadounidenses analizadas por CPA-Zicklin muestra cómo las empresas australianas se quedan atrás de sus competidores, como se muestra en la Figura 1 a continuación.

¹ Institutional Shareholder Services (ISS) es la empresa más amplia, e ISS ESG es el negocio que se centra en la inversión responsable y en la investigación y calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG).

² Centro de Responsabilidad Política (sf) Índice CPA-Zicklin: Un enfoque en la transparencia, <https://www.politicalaccountability.net/cpa-zicklin-index/>

Figura 1: Puntuaciones promedio de EE. UU. frente a Australia

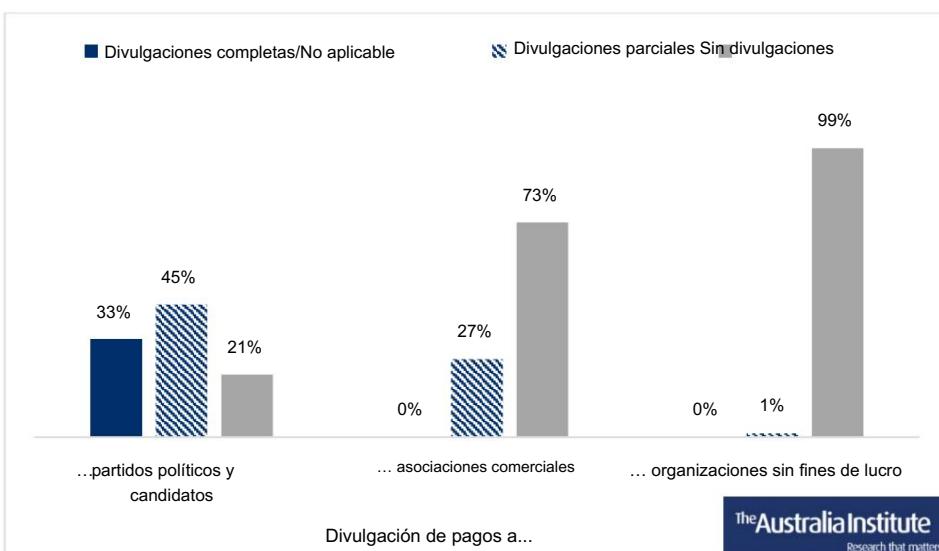


Fuente: Datos proporcionados por ISS-ESG

El gasto político corporativo en Australia revela que la divulgación de pagos políticos corporativos es irregular. Si bien la mayoría de las empresas analizadas divulgaron al menos parcialmente los pagos a partidos políticos y candidatos, esto se debió en parte a que todas las empresas con sede principalmente en Australia fueron automáticamente evaluadas como empresas que realizan divulgaciones parciales, debido a que están sujetas a las leyes federales sobre donaciones. Como se muestra en la Figura 2.

A continuación, sólo una de cada cuatro empresas (27 por ciento) reveló pagos a asociaciones comerciales y sólo una de las 75 reveló pagos a organizaciones sin fines de lucro.

Figura 2: Divulgación de pagos de la empresa



Fuente: Datos proporcionados por ISS-ESG

A pesar del importante papel económico y político que desempeñan las grandes empresas que cotizan en bolsa, los partidos políticos australianos han mostrado poco interés en la regulación de las corporaciones. Un estudio del Instituto Australia, publicado a principios de este año, revela que, si bien existen notables excepciones, en general los partidos políticos carecen de políticas detalladas sobre democracia y gobernanza corporativa.

³ Como gasto político corporativo

En Australia, el Reino Unido y Estados Unidos son más ambiciosos en diversas áreas de responsabilidad corporativa. Por ejemplo, a nivel federal, Estados Unidos tiene estrictos requisitos de divulgación de información sobre actividades de lobby y prohíbe las contribuciones directas de las empresas a partidos y políticos, mientras que el Reino Unido exige que las empresas que cotizan en bolsa soliciten el consentimiento de los accionistas para realizar contribuciones políticas.

Cuando las empresas publican poca información sobre sus políticas o comportamiento, se vuelve imposible para los accionistas evaluar si están actuando en el mejor interés de sus accionistas, y mucho menos de los de Australia en su conjunto.

Las empresas pueden esperar un mayor escrutinio por parte de los accionistas sobre desajustes y posibles desajustes. Desde 2017, las empresas del ASX200 han enfrentado 156 resoluciones y declaraciones de accionistas sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).⁴ Una investigación de InfluenceMap Australia expone el incumplimiento por parte de ciertas empresas de sus posturas declaradas sobre el cambio climático y la necesidad de acción climática.⁵ La presión de los accionistas ha obligado a importantes empresas a revisar sus afiliaciones a asociaciones comerciales para detectar desajustes en la acción climática.⁶

El enfoque en la membresía de las asociaciones comerciales es particularmente pertinente porque las asociaciones comerciales son a menudo el escenario del cabildeo corporativo y la publicidad política.

Una próxima investigación del Instituto Australia revelará el poder y la influencia de

³ Browne (2023) Plataformas de partidos sobre democracia corporativa y gobernanza,

<https://australiainstitute.org.au/report/party-platforms-on-corporate-democracy-governance/>

⁴ Resoluciones de accionistas australianos de ESG de ACCR (nd) , <https://www.accr.org.au/research/australian-esg-resolution-voting-history/>

⁵ InfluenceMap Australia (nd) Australia: Participación corporativa en políticas climáticas, <https://australia.influencemap.org/>

⁶ BHP (nd) Asociaciones de la industria, <https://www.bhp.com/about/operating-ethically/industry-associations>; Fortescue (2022) Informe de la asociación de la industria del año fiscal 22,

<https://www.fmgl.com.au/docs/default-source/corporate-governance-documents/industry-association-report-v1.pdf>; Origin (2022) Revisión de la asociación de la industria, https://www.originenergy.com.au/about/investors-media/governance/industry_association_memberships/; Rio Tinto (2021) Divulgación de la asociación de la industria, <https://www.riotinto.com/en/sustainability/ethics-integrity/industry-association-disclosure>; Declaración de Santos

(2022) sobre la revisión de las asociaciones industriales (2022), <https://www.santos.com/wp-content/uploads/2022/12/Statement-on-2022-Review-of-Industry-Associations-Final-13-December-2022.pdf>

asociaciones comerciales en el debate político australiano, incluyendo: la “mafia del efecto invernadero” que usó su acceso al gobierno de Howard para socavar la acción climática, la campaña publicitaria de \$20 millones del Consejo de Minerales de Australia contra el impuesto minero del gobierno de Rudd, el cabildero “feroz” de Clubs Australia para convencer al gobierno de Gillard de que abandonara el compromiso previo obligatorio para las máquinas de póquer y la campaña de la industria de 2018 contra la Oposición Laborista después de que propusiera eliminar las máquinas de póquer de los pubs y clubes en Tasmania.⁷

Estas campañas representan algunas de las intervenciones más poderosas en la política australiana durante las últimas dos décadas: obstaculizan la acción climática, contribuyen a la caída de un primer ministro en su primer mandato, reducen los ingresos públicos en cientos de millones de dólares y exponen a más australianos a los daños del juego.

A pesar de esto, ninguna de las empresas que cotizan en bolsa analizadas por ISS-ESG reveló completamente sus pagos a asociaciones comerciales, y la gran mayoría (73 por ciento) ni siquiera calificó para una puntuación de “divulgación parcial”.

Los accionistas deben tener muy claras las consecuencias de la afiliación a asociaciones gremiales para las empresas en las que invierten. El gasto político corporativo en Australia identifica varios ejemplos de cómo una empresa puede descartar realizar contribuciones políticas, sin dejar de tener una influencia significativa en el debate político:

- BHP tiene una política de “imparcialidad con respecto a la política partidista y no hace contribuciones políticas”, pero aún así ha gastado millones de dólares en campañas políticas directamente o a través de pagos a asociaciones comerciales.
- South32 y Rio Tinto descartan donaciones políticas, pero financian a Minerals Consejo de Australia y el Consejo Empresarial de Australia, que realizan donaciones políticas (MCA) o participan en gastos electorales (BCA). • Santos tiene la política de no realizar ninguna donación en efectivo a ningún partido político.

No obstante, las declaraciones de donantes de Santos para 2020-21 muestran donaciones a los partidos Laborista y Nacional. Presumiblemente, las contribuciones son en especie o para acceder a... eventos.

⁷ Cohen (2006) La mafia del invernadero, <https://www.abc.net.au/4corners/the-greenhouse-mafia/8953566>; Griffiths (2012) Gillard defiende la ruptura del acuerdo de las tragamonedas, <https://www.abc.net.au/news/2012-01-23/gillard-defends-pokies-trial/3787500>; Morton (2018) "El Partido Laborista piensa que eres estúpido": el lobby de las tragamonedas lucha duro en las elecciones de Tasmania, <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/23/labor-thinks-youre-stupid-pokies-lobby-fights-hard-in-tasmanian-election>; Osborne y redactor político senior de AAP (2011) Las empresas mineras gastan 20 millones de dólares para luchar contra los impuestos, <https://www.smh.com.au/national/mining-firms-spend-20m-to-fight-tax-20110201-1ac46.html>

ISS-ESG analiza la regla general de que el gasto político indirecto es diez veces mayor que el gasto político directo, lo que demuestra los riesgos de una reforma del financiamiento político que se centra en las donaciones políticas a expensas de otras fuentes de influencia corporativa.⁸

Las empresas australianas con mayor puntuación en el índice CPA-Zicklin modificado son AGL Energy (44,3 %), Rio Tinto (42,9 %), Vicinity Centres (42,9 %) y Harvey Norman Holdings (40,0 %). Otras siete empresas obtienen una puntuación del 38,6 %: BHP Group, Challenger, Dexus, Mirvac Group, National Australia Bank, Newcrest Mining y Stockland.

Si bien estas empresas merecen ser felicitadas por liderar el mercado en Australia, cabe destacar lo lejos que están de las mejores prácticas en Estados Unidos. Las empresas australianas con mejor desempeño tienen un rendimiento inferior al de la empresa promedio del S&P 500.⁹

En Australia, la divulgación del gasto político indirecto real, como el canalizado a través de membresías y otros pagos a terceros, así como de las políticas que rigen dicho gasto, es escasa. De las 75 empresas de la Bolsa de Valores de Australia (ASX) evaluadas, ninguna obtuvo una calificación perfecta en la supervisión del gasto político directo e indirecto por parte de la junta directiva.

El marco regulatorio comparativamente débil en torno a las contribuciones políticas en Australia deja lagunas que permiten a las empresas evitar revelar detalles de sus Gasto político. Los inversores pueden promover la gobernanza responsable del gasto político corporativo mediante:

- Prestar atención al gasto político directo e indirecto en sus diversas formas;
- Establecer estructuras de supervisión independiente;
- Revisar periódicamente las políticas y el gasto real; y
- Considerar las implicaciones más amplias de las cuestiones ambientales y sociales asociadas con el gasto político.

La limitada divulgación voluntaria, supervisión y desarrollo de políticas, incluso por parte de las grandes corporaciones australianas, sugiere que se necesita regulación y supervisión gubernamental. La alternativa es arriesgarse a que las corporaciones gasten grandes sumas de dinero en política.

⁸ Para más información, véase Browne (2023) Principios para una reforma justa del financiamiento político, <https://australiainstitute.org.au/report/principles-for-fair-political-finance-reform/>

⁹ Promedio de las empresas que han estado en el índice S&P 500 desde 2015; consulte el sistema de puntuación para los niveles y los resultados del S&P 500: Centro de Responsabilidad Política (2022) El índice CPA-Zicklin de divulgación política corporativa y rendición de cuentas 2022, págs. 20, 23, <https://www.politicalaccountability.net/cpa-zicklin-index/>

Campañas o contribuciones políticas con transparencia y rendición de cuentas limitadas. Estados Unidos y el Reino Unido tienen normas más estrictas y amplias en estas áreas, lo que podría inspirar el desarrollo de políticas públicas australianas.



Gasto político corporativo en Australia

Agosto de 2023

ISS ESG fue encargado por y en nombre de The Australia Institute para actualizar el informe de 2016 "Gasto político corporativo en Australia" de Howard Pender. Al igual que el informe de 2016, este utiliza una versión del Índice CPA-Zicklin adaptada al contexto australiano. El Índice CPA-Zicklin es una medida de la transparencia y la rendición de cuentas del gasto electoral, elaborada por el Centro para la Rendición de Cuentas Política, con sede en Washington, D. C., en colaboración con el Centro Zicklin para la Gobernanza y la Ética Empresarial de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. El Índice CPA-Zicklin no es una metodología de ISS.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo	3
Glosario	5
Introducción	6
1. Contexto político y legislación en el Reino Unido, los EE. UU. y Australia	7
1.1. Contexto de política	7
1.2. Ley	8
1.2.1. El Reino Unido	9
1.2.2. Estados Unidos	10
1.2.3. Australia	11
2. Donaciones y gastos políticos corporativos en la práctica en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia	
13	
2.1. El Reino Unido	13
2.2. Estados Unidos	14
2.3. Australia	15
3. Conducta de las empresas australianas: contexto internacional	16
3.1. Conducta en los EE. UU.	16
3.2. Conducta de las empresas australianas: 75 empresas de la ASX	17
3.3. Comparación de la conducta de las empresas en Australia y en los EE. UU.	19
Conclusión	21
Apéndice A – El índice CPA-Zicklin y las divulgaciones de mejores prácticas en los EE. UU.	22
El Centro de Responsabilidad Política (CPA)	22
Índice CPA-Zicklin 2021	22
Apéndice B – Versión australiana personalizada del índice CPA-Zicklin	26
Divulgación	26
Política	28
Supervisión	29
Apéndice C – Resultados de la puntuación de 75 empresas de la ASX	30
Apéndice D – Llegando al fondo del gasto político corporativo	33
Gasto político directo	33
Gasto político indirecto	35
Apéndice E – El gasto político corporativo y sus posibles impactos en la democracia en los EE. UU.	37
Apéndice F – Alineación de las actividades políticas corporativas con los valores corporativos	39
Apéndice G – Investigación de la participación política corporativa a través de asociaciones industriales	41
Apéndice H – Enfoque en la industria de recursos y energía de Australia	43
Apéndice I – Diferentes estados y territorios, diferentes requisitos en Australia	45

Resumen ejecutivo

Este informe examina el escrutinio y la supervisión del gasto político corporativo por parte del público y los accionistas en Australia. Para ello, se realiza una revisión del marco legal en materia de gasto político corporativo en Australia, incluyendo una comparación con la legislación pertinente del Reino Unido y Estados Unidos, así como la conducta empresarial en cada país en materia de contribuciones políticas.

En los tres países, se observan diferentes enfoques en las respectivas leyes que rigen el gasto político corporativo. Estos enfoques probablemente reflejen la relevancia y la importancia que las empresas, los accionistas y el público asignan a este tema.

Lo que, en consecuencia, podría dar lugar a diferentes políticas y divulgaciones en torno al gasto político, así como a procedimientos de gobernanza relacionados.

En cada país se adoptan diferentes enfoques respecto a la prohibición de ciertos tipos de contribuciones y las obligaciones de divulgación de las contribuciones realizadas, así como a los procedimientos definidos para permitir dichas contribuciones. Mientras que en Estados Unidos, a nivel federal, las empresas tienen prohibido realizar donaciones políticas directas, y el cabildeo a nivel federal está sujeto a obligaciones obligatorias de divulgación de gastos, no existen tales normas en el Reino Unido ni en Australia. En Estados Unidos, la divulgación corporativa de otros gastos políticos a los accionistas también se está convirtiendo en la norma. En el Reino Unido, las empresas que cotizan en bolsa requieren la aprobación de los accionistas antes de incurrir en gastos políticos, y muchos consejos de administración evitan por completo el gasto político directo. Entre las empresas que sí buscan la aprobación de los accionistas, la divulgación pública de gastos políticos directos es común. Existe un registro de cabildeo y se exige la publicación de los diarios ministeriales para aumentar aún más la transparencia de las actividades de cabildeo.

En Australia, hasta la fecha, no existe una divulgación obligatoria de los gastos de lobby, y existe una divulgación voluntaria mínima de dichos gastos.

En cuanto a las contribuciones políticas corporativas a nivel federal, Australia presenta el enfoque legal más permisivo. Como resultado, la divulgación sistemática por parte de las empresas que pueda interpretarse de manera significativa es escasa, y la divulgación voluntaria sigue siendo escasa. Una evaluación sistemática de 75 empresas de la Bolsa de Valores de Australia (ASX) reveló que solo alrededor del 25 % de las empresas evaluadas contaba con una política que prohibía el gasto político corporativo directo, y solo alrededor del 10 % de las empresas restantes divulgaban dicho gasto de forma detallada. Prácticamente no se puede obtener información sobre el gasto político indirecto mediante el análisis de fuentes públicas.

Dado que las empresas actualmente no divultan sus gastos políticos de forma sistemática y consistente, el volumen y los patrones del gasto político corporativo en Australia son difíciles de cuantificar. Por consiguiente, el impacto de dicho gasto en la política australiana es difícil de evaluar. Sin dicha divulgación, también es difícil argumentar que el gasto podría no ser pertinente para la evaluación de los accionistas sobre la gestión del consejo, considerando que los intereses de los ejecutivos y directores de la empresa, por un lado, y de los accionistas, por otro, podrían divergir. Si bien las resoluciones de los accionistas que abordan el gasto político directo...

Aunque se desconocen hasta la fecha en Australia, existe un creciente escrutinio por parte de los accionistas sobre el grado de alineación o desalineación entre los valores corporativos y las membresías en asociaciones sectoriales, en particular sobre cualquier brecha entre las políticas declaradas por las empresas y las iniciativas de cabildeo de las respectivas asociaciones sectoriales en el contexto del cambio climático. A pesar de las pequeñas cantidades gastadas con fines políticos, el impacto en las políticas públicas puede ser bastante significativo. La divulgación, ya sea voluntaria o estatutaria/obligatoria, junto con procedimientos definidos para involucrar proactivamente a los accionistas en las decisiones sobre si se deben gastar los fondos corporativos y cómo hacerlo, será esencial para garantizar que el gasto político corporativo promueva los intereses a largo plazo de los accionistas.

Desde una perspectiva social más amplia, también existe el riesgo de que las actividades políticas corporativas, especialmente las llevadas a cabo por grandes corporaciones, influyan desproporcionadamente en los debates sobre políticas públicas en comparación con las actividades de otros grupos de interés con menos recursos financieros. Dado que las empresas dependen de una democracia pública sólida para planificar su seguridad y la estabilidad de sus operaciones, la prevención de la influencia indebida en las políticas públicas, la legislación y la regulación debería redundar en el mejor interés de las autoridades responsables de la toma de decisiones de la empresa, así como de sus accionistas.

Este documento se basa en el artículo Gasto político corporativo en Australia de Howard Pender, escrito para el Centro Australasiano de Responsabilidad Corporativa y publicado en 2016.¹

¹ Howard Pender (2016), Gasto político corporativo en Australia, <https://www.accr.org.au/research/>.

Glosario2

AEC	Organizaciones de la Comisión Electoral
Asociado Entidades	Australiana asociadas con un partido político específico en Australia. Por ejemplo, la Fundación Cormack es una empresa de inversión australiana que distribuye fondos al Partido Liberal de Australia (División Victoriana).
Césped artificial grupo	El "astroturfing" es la práctica de corporaciones y grupos de presión que crean la ilusión de un apoyo popular. Un grupo astroturf es un grupo o coalición ciudadana aparentemente de base, pero que en realidad es concebido, creado y/o financiado principalmente por corporaciones, asociaciones gremiales, intereses políticos o agencias de relaciones públicas.
c4	Término estadounidense para las organizaciones sin fines de lucro de bienestar social registradas bajo la sección 501(c)(4) del código tributario estadounidense. Estas organizaciones no pueden realizar donaciones directas a políticos, candidatos o partidos. Sin embargo, pueden realizar gastos independientes en apoyo de candidatos o partidos, pero esta no puede ser su actividad principal. Pueden gastar libremente en actividades de cabildeo.
Centro para la Responsabilidad Política	El Centro para la Responsabilidad Política, una organización no gubernamental que colabora con el Centro Zicklin para la Investigación de Ética Empresarial de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, para producir un índice que puntúa el desempeño de las empresas que integran la lista Standard & Poor's 500 de Estados Unidos en materia de divulgación política y responsabilidad.
Directo gasto político	Donaciones y otros pagos a políticos, partidos, candidatos, sus asociados u organizaciones de apoyo a partidos o campañas, así como gastos por cuenta propia, como el pago directo a empresas por publicidad, destinados a influir en la opinión pública, burocrática o de las élites hacia candidatos, partidos o temas. Estas donaciones pueden realizarse independientemente de los candidatos o partidos e incluyen la provisión de beneficios en especie y pagos adicionales para asistir a eventos.
Indirecto gasto político	Gasto que pasa a través de un tercero, como asociaciones comerciales, grupos de presión, grupos de expertos y grupos activistas (ya sean grupos legítimos de base o grupos artificiales) para influir en el apoyo público, burocrático o de élite a políticos, candidatos o partidos, o en las actitudes públicas, burocráticas o de élite hacia un tema político o una elección, o hacia el resultado de los mismos.
PAC y 'Super PAC'	Comité de Acción Política (PAC), una figura jurídica estadounidense. Un PAC suele ser una organización patrocinada por una empresa cuyo objetivo es influir en los resultados electorales. Generalmente recibe contribuciones voluntarias de los empleados de la empresa patrocinadora y puede solicitar donaciones públicas adicionales. Los PAC, a su vez, están sujetos a límites en la cantidad que pueden donar a candidatos y partidos. En cambio, los Super PAC pueden recaudar cantidades ilimitadas de cualquier donante estadounidense identificado y realizar gastos independientes ilimitados. Los Super PAC suelen hacer campaña a favor de candidatos o sobre temas específicos (en lugar de donar a candidatos o partidos).
Político contribuciones	Un término amplio que abarca tanto el gasto político indirecto como el directo.

² Howard Pender (2016), Gasto político corporativo en Australia, pág. 5.

³ Sus actividades no encajan perfectamente en las categorías políticas australianas. Algunos C4 se asemejan a una entidad asociada australiana, por ejemplo, Defending Main Street, alineada con republicanos moderados. Otros se asemejan más a grupos de presión centrados en un solo tema, como diversos grupos a favor o en contra del control de armas. Otros desempeñan un papel similar al activismo político de un grupo activista australiano, como la Red de Crisis Judicial (también conocida como el Fondo Concord), que apoya el nombramiento/elección de jueces y candidatos que apoyan una participación limitada del gobierno. Otros, en cambio, desempeñan un papel más similar al del personal de asuntos gubernamentales de una asociación comercial, como el Proyecto Jeffersoniano, que fue el brazo de cabildeo del Consejo Americano de Intercambio Legislativo .

Significativo Terceros	Entidades con un gasto electoral australiano de más de 250.000 dólares australianos al año (o más de 14.500 dólares australianos en un año en que esto represente al menos un tercio de sus ingresos) ⁴ ; por ejemplo, GetUp! y Advance Australia.
------------------------	---

Introducción

Tras los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes del entonces presidente Donald Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos, muchas grandes empresas estadounidenses anunciaron su intención de retener y reevaluar sus contribuciones políticas. Algunos comités de acción política (PAC) suspendieron todas sus contribuciones políticas tras el incidente, y otros anunciaron que suspenderían las contribuciones a los congresistas que votaron en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, las contribuciones de empresas y asociaciones sectoriales a estos congresistas continuaron, y existe un creciente interés público por comprender si los compromisos de las empresas se reflejan en sus acciones. De igual manera, en Australia, cobran fuerza las demandas de alinear los valores corporativos con los valores y acciones de las asociaciones sectoriales, con un fuerte enfoque en el cambio climático.

En este informe, se distinguen dos clases de gasto político. El primero es el gasto político directo, que abarca las donaciones a candidatos o partidos (incluidas las realizadas a afiliados de partidos) y los gastos de campaña por cuenta propia centrados en candidatos, temas o partidos. El segundo es el gasto político indirecto, que abarca los pagos a terceros, como asociaciones gremiales, grupos de presión, think tanks y grupos activistas, que pueden utilizarse con fines políticos. En conjunto, los gastos indirectos y directos se denominan "contribuciones políticas" o "gasto político". El informe no pretende documentar los niveles ni los patrones del gasto corporativo en Australia en actividades de cabildeo, también conocidas como "asuntos gubernamentales". A pesar de que probablemente supere a otras formas de gasto político corporativo, se dispone de poca información sobre Australia.⁵

La Sección 1 de este documento ofrece una revisión de la legislación sobre el gasto político corporativo en EE. UU., el Reino Unido y Australia. Aborda brevemente las leyes y regulaciones en torno a las actividades de lobby. Sin embargo, es importante señalar que las definiciones de actividades de lobby sujetas a restricciones y requisitos de divulgación pueden variar entre jurisdicciones, por lo que las comparaciones entre países deben realizarse con cautela. Los diferentes entornos regulatorios pueden tener un impacto significativo en la conducta corporativa en relación con las contribuciones políticas. La Sección 2 aborda la práctica en EE. UU., el Reino Unido y Australia. La Sección 3 evalúa y compara los enfoques corporativos respecto al gasto político, la divulgación y los mecanismos de supervisión en EE. UU. y

⁴ Anteriormente llamados activistas políticos; para más detalles, véase AEC (2022), Terceros Significativos, https://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/financial_disclosure/guides/significant-third-parties.htm.

⁵ Howard Pender (2016), Gasto político corporativo en Australia, pág. 7. 6

Australia. Esta sección ofrece, en primer lugar, un resumen de los resultados de las empresas estadounidenses del S&P 500 evaluadas según el índice CPA-Zicklin en 2021. Posteriormente, se califica a 75 empresas que cotizan en la ASX utilizando una versión ligeramente adaptada del índice CPA-Zicklin 2021 para el caso australiano. La sección 3 concluye con una comparación de los resultados de esta evaluación agregada de la conducta de las empresas estadounidenses y australianas.

1. Contexto político y legislación en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia

1.1. Contexto político. La

Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN)⁶ aborda las inquietudes de los inversionistas sobre la participación corporativa en el proceso político desde las perspectivas de la ética empresarial y el gobierno corporativo. La ICGN afirma que un buen gobierno corporativo debe garantizar que las empresas utilicen los fondos corporativos, incluidos aquellos destinados a actividades políticas, en el mejor interés de sus accionistas. Dado que las empresas pueden verse significativamente afectadas por las políticas públicas, la legislación y la regulación, puede ser beneficioso para los inversionistas que estas asuman un rol activo en la información de los debates sobre políticas públicas. Sin embargo, debido a la posible divergencia de intereses entre los ejecutivos, directores y accionistas de las empresas con respecto al gasto político corporativo⁷, persiste la preocupación de que los fondos corporativos no siempre se utilicen en el mejor interés de los accionistas y de la empresa en su conjunto. Por lo tanto, las empresas deben garantizar que las actividades políticas sean legítimas y se lleven a cabo de manera transparente, para que las empresas y sus juntas directivas puedan rendir cuentas por sus actividades políticas corporativas. Además, la ICGN destaca el riesgo de que los debates sobre políticas públicas puedan verse influenciados desproporcionadamente por las actividades políticas corporativas, especialmente las realizadas por grandes corporaciones, en comparación con otros grupos de interés con menores recursos financieros.

A nivel mundial, los países han adoptado diferentes enfoques en sus marcos jurídicos, lo que se traduce en diferentes enfoques para regular el gasto político corporativo. Esto se traduce en distintos niveles de restricciones a los que las empresas podrían estar sujetas. La siguiente sección ofrece un análisis de los marcos jurídicos relevantes para el gasto político corporativo en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia a nivel federal. (En el caso de Australia, donde los diferentes marcos jurídicos existentes pueden aplicarse al gasto político corporativo en diferentes estados, cada marco se examina por separado).

⁶ Red Internacional de Gobernanza Corporativa (2017), Lobby político y donaciones, págs. 14-15, <https://www.icgn.org/sites/default/files/2021-06/ICGN%20Lobby%20Político%20%26%20Donaciones%202017.pdf>.

⁷ Bebchuk y Jackson (2010), Discurso político corporativo: ¿Quién decide?, pág. 83, 117, https://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/pdfs/vol_12401bebchuk_jackson.pdf.

1.2. Derecho

En un informe conjunto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI) analizaron los sistemas regulatorios de 17 grandes economías en torno a la participación política corporativa.⁸ Los diferentes enfoques adoptados en Australia, el Reino Unido y los EE. UU. con respecto a la prohibición de ciertos tipos de donaciones políticas, así como a la imposición de límites a las cantidades que se pueden gastar con fines políticos, se muestran en la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1: Enfoques de las donaciones políticas en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos
Estados

	Contribuciones privadas prohibidas		Reglamento sobre el gasto / Límites de gasto	
	Corporativo donaciones a partidos políticos y candidatos	Donaciones extranjeras a partidos y candidatos	Límites de gastos de terceros ⁹	Límites de gasto para los partidos políticos y candidatos
AUSTRALIA	No	Sí, pero específico. límite	No	No
UNIDO REINO	No	Sí	Sí	Sí
UNIDO ESTADOS	Sí	Sí	No	Sí

Fuente: OCDE, base de datos sobre regulaciones de participación política corporativa, 2022

Parece que Australia tiene la postura más indulgente respecto de las donaciones privadas, incluidas las de empresas, y respecto de los límites de gasto de partidos políticos, candidatos y terceros partidos.

El gasto de terceros sigue siendo un desafío a nivel mundial y puede constituir un medio para recanalizar el gasto electoral a través de comités, como los Super PAC en Estados Unidos, y otros grupos de interés (por ejemplo, organizaciones benéficas, fundaciones, grupos de expertos, asociaciones comerciales, grupos activistas).

El Reino Unido impone límites al gasto que terceros pueden realizar en actividades de campaña electoral. Si bien los tres países de interés se encuentran entre los que han adoptado la regulación del cabildeo, los requisitos de transparencia relacionados con las actividades de cabildeo siguen siendo limitados.

Estados Unidos es el único país de esa muestra que exige a los lobbystas que revelen información sobre sus gastos de lobby y sus contribuciones a partidos políticos y candidatos.

⁸ OCDE/PRI (2022), Regulación de la participación política corporativa: tendencias, desafíos y el papel de los inversores, <https://www.oecd.org/governance/ethics/regulating-corporate-political-engagement.htm>.

⁹ Las definiciones de «terceros» difieren según el país. Consulte los detalles en las secciones correspondientes de cada país del informe OCDE/PRI (2022). 8

La regulación para proteger los derechos de los accionistas en las empresas públicas rara vez incluye un requisito para que los accionistas aprueben contribuciones políticas o gastos de lobby.

1.2.1. Reino Unido.

La Ley de Partidos Políticos y Referéndums (2000) y la Ley de Representación Popular (1983) son las principales leyes que regulan la financiación política en el Reino Unido. Desde el año 2000, además de las obligaciones de divulgación, la Ley de Sociedades del Reino Unido¹⁰ exige la aprobación de los accionistas para las donaciones y gastos políticos de las empresas que cotizan en bolsa,¹¹ lo que lo convierte en el único país de los 17 incluidos en el informe de la OCDE que lo hace. Disposiciones análogas se aplican a los sindicatos en el Reino Unido¹².

La Ley de Lobby, Campañas No Partidarias y Administración Sindical, promulgada en 2014, no exige directamente a los lobistas que revelen sus contribuciones políticas, pero sí ha aumentado la transparencia en relación con el gasto de algunos activistas de terceros al exigirles que publiquen y registren más información sobre sus gastos, donaciones, cuentas y miembros de la junta directiva. Si bien el Reino Unido es el único país que ha combinado un registro de lobistas con el requisito de que los funcionarios públicos publiquen su agenda, la mayoría de las actividades de lobistas no están cubiertas por el registro.¹³ La deducción fiscal de las donaciones/suscripciones políticas de empresas del Reino Unido sigue siendo una zona gris en la legislación fiscal del Reino Unido.¹⁴ Las donaciones de extranjeros no están

¹⁰ Ley de Sociedades de 2006 (Reino Unido), <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents>.

¹¹ La definición de gasto político es amplia: las empresas de medios de comunicación deben estar exentas, y una estrategia común para las empresas que no desean realizar ningún gasto es solicitar autorización para una pequeña cantidad en caso de que, inadvertidamente, entren en el territorio cubierto por esta ley. La ley se aplica a todas las empresas públicas, abarca las donaciones y los gastos, se rastrea a través de holdings, permite una exención para las suscripciones a asociaciones comerciales y exime las donaciones agregadas inferiores a 5.000 libras esterlinas. Ley de Sociedades de 2006.

Parte 14, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/part/14>.

¹² Un sindicato debe realizar una votación entre sus afiliados si desea operar un fondo político, y estos pueden optar por no pagar cuotas a dicho fondo. Véase el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (2018), Fondos Políticos Sindicales.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/245595/10-817-trade-sindical-political-funds-guide.pdf.

¹³ OCDE/PRI (2022), Regulación de la participación política corporativa: tendencias, desafíos y el papel de los inversores, pág. 39.

¹⁴ Las declaraciones formales sobre el tema indican una falta de deducibilidad de las suscripciones, consulte HM Revenue and Customs (2022), Business Income Manual, <http://www.hmrc.gov.uk/manuals/bimmanual/bim47405.htm>.

Sin embargo, en la práctica, parece que la Autoridad Tributaria del Reino Unido con frecuencia permite una deducción efectiva. "La autoridad tributaria británica simplemente no grava las donaciones [políticas corporativas] realizadas de esta manera", afirmaron seis asesores fiscales. La autoridad tributaria, la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC), afirmó tener el derecho legal de gravar dichas donaciones, pero no explicó por qué no ejerció este derecho". Véase Bergin (2015), Para los donantes políticos del Reino Unido, una deducción fiscal no intencionada, <http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3058812/For-UK-political-donors-unintended-tax-break.html>. Parece que la Autoridad Tributaria del Reino Unido a veces permite la deducción de donaciones, pero aunque tendría la capacidad de considerar una donación corporativa de una empresa privada como ingresos en manos de los accionistas (similar al impuesto sobre beneficios complementarios en Australia), se niega a hacerlo.

permitido,¹⁵ aunque las donaciones de ciudadanos del Reino Unido no residentes se han vuelto legales de facto sin límite.¹⁶

1.2.2. Estados Unidos

Las contribuciones políticas a nivel federal en los Estados Unidos están regidas en gran medida por la Ley de Campaña Electoral Federal de 1971. La ley prohíbe a las corporaciones realizar contribuciones directas a candidatos o partidos federales,¹⁷ pero permite a sus empleados hacerlo a través de "Comités de Acción Política", cuyos fondos pueden utilizarse posteriormente en las elecciones federales. 1974

La enmienda a la Ley condujo a la formación de la Comisión Federal Electoral como una organismo de supervisión e introdujo límites al gasto en campañas.¹⁸

Una decisión de la Corte Suprema de 2010, Citizens United contra la Comisión Federal Electoral, marcó un hito en el caso del gasto político en Estados Unidos.¹⁹ El fallo determinó que el gasto político independiente no representaba una amenaza de corrupción, revirtiendo varias leyes anteriores sobre financiación política corporativa y permitiendo a las corporaciones y otros grupos gastar fondos ilimitados en gastos electorales. El fallo se basó en el supuesto de que los accionistas tendrían conocimiento del gasto político de las empresas en las que invierten, garantizando así que el gasto político esté alineado con los intereses de los accionistas. Como resultado, las corporaciones ahora pueden gastar fondos ilimitados en publicidad de campaña, siempre que no se coordinen con un candidato o partido político, aunque el fallo confirmó la prohibición de las contribuciones directas de las corporaciones a candidatos o partidos. Si bien algunos grupos, como los Super PAC, están obligados a revelar sus donantes, otras organizaciones, como las organizaciones de bienestar social 501(c)(4), no están obligadas a hacerlo, lo que genera un nivel considerable de secretismo.²⁰

El código tributario de los Estados Unidos niega una deducción por actividades de lobby y gastos políticos.²¹ Además, bajo la Ley Federal de Divulgación de Actividades de Lobby (1995), las empresas con personal involucrado en actividades de lobby o que utilizan lobistas contratados en los Estados Unidos deben hacer públicos informes semestrales de contribuciones sobre gastos de lobby.

²² Sin embargo, el uso de las redes sociales y las organizaciones de base

¹⁵ Véase la Ley de Partidos Políticos, Elecciones y Referéndums del Reino Unido de 2000, sección 54, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/41/section/54>.

¹⁶ Rennard (2022), Las donaciones políticas de personas no domiciliadas deberían limitarse, <https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/04/political-donations-from-non-doms-should-be-curtailed>.

¹⁷ Esta restricción se remonta a la Ley Tillman de 1907.

¹⁸ Ballotpedia (nd), Leyes y reglamentos de financiamiento de campañas federales, https://ballotpedia.org/Federal_campaign_finance_laws_and_regulations.

¹⁹ Lau (2019), Ciudadanos Unidos Explicado, <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/citizens-unidos-explicado>.

²⁰ Secretos abiertos (nd), Gasto externo por divulgación, excluyendo comités de partidos, <https://www.opensecrets.org/outside-spending/dark-money-groups/disclosure>.

²¹ Código de los Estados Unidos, Sección 162(e), <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/162>; Elliott (2012), ¿Podrían las corporaciones obtener exenciones fiscales sobre el "dinero oscuro" político?, <http://www.propublica.org/article/could-corporations-be-taking-tax-breaks-on-political-dark-money>.

²² Oficina del Secretario de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (2021), Guía de la Ley de Divulgación de Actividades de Cabildeo, sección 3, "Definiciones – Informes de contribuciones", https://lobbyingdisclosure.house.gov/amended_lda_guide.html.

Las comunicaciones de los grupos de presión para influir indirectamente en las políticas públicas no se consideran actividades de actividad amplia y, por lo tanto, no está sujeta a la divulgación por parte del grupo de presión. La presión. 23 Se trata de una prohibición de gastos de empresas extranjeras destinadas a influir en las elecciones estadounidenses.²⁴

1.2.3. Australia En

Australia, a nivel federal, las donaciones a candidatos, partidos o entidades asociadas²⁵ superiores a 14.300 dólares australianos (para el año fiscal 2020-21) deben declararse a la Comisión Electoral Australiana (AEC), que publica dichas donaciones.²⁶ Los gastos de campaña a nivel federal por cuenta propia también deben declararse. 27 Activista político (ahora Tercero Significativo)

Las disposiciones se introdujeron por primera vez en la Ley Electoral de la Commonwealth de 1918 en 2018, requiriendo que 28 los principales actores políticos no partidarios (por ejemplo, asociaciones comerciales como el Consejo Empresarial de Australia [BCA] y el Consejo de Minerales de Australia [MCA] y organizaciones activistas como GetUp! o Advance Australia) informen datos sobre su actividad política.

A diferencia del Reino Unido, no existe la obligación de que los accionistas aprueben la actividad política de las empresas que cotizan en bolsa. A diferencia de Estados Unidos, no existen prohibiciones federales generales sobre las donaciones directas.

²³ OCDE/PRI (2022), Regulación de la participación política corporativa: tendencias, desafíos y el papel de los inversores, pág. 19.

²⁴ La prohibición se extiende a la exclusión de filiales extranjeras que formen Comités de Acción Política (PAC) cuyo financiamiento u operación involucre a ciudadanos no estadounidenses. Véase Comisión Federal de Elecciones (s.f.), [Ciudadanos extranjeros, http://www.fec.gov/pages/brochures/foreign.shtml#Prohibition](http://www.fec.gov/pages/brochures/foreign.shtml#Prohibition).

²⁵ No existe una disposición de agrupación entre las ramas del partido del estado receptor ni entre las personas físicas relacionadas con el donante. AEC (2016), Guía de divulgación financiera para donantes de partidos políticos, «Donaciones a un partido cuando este tiene varios registros federales», http://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/financial_disclosure/guides/donors/information.htm#relado.

²⁶ Ley Electoral de la Commonwealth de 1918, artículo 305B. También existe una disposición de agrupación para las empresas donantes: El artículo 287(6) de la Ley Electoral de la Commonwealth de 1918 considera que las personas jurídicas relacionadas según las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2001 constituyen una sola entidad, por lo que las donaciones deben agregarse en todo el grupo y luego declararse en una sola declaración a nombre de la sociedad matriz. Sin embargo, los datos pueden estar bastante desactualizados. Se publican en febrero del ejercicio fiscal siguiente.

²⁷ Véase la Ley Electoral de la Commonwealth de 1918, artículo 314AEB. Los requisitos de divulgación similares a nivel estatal son irregulares. Por ejemplo, la Ley de Financiamiento Electoral de Nueva Gales del Sur de 2018, artículo 20, exige la divulgación de los gastos de campaña de terceros, pero no existen disposiciones similares en Victoria. Véase Victoria, Ley Electoral de 2002, artículo 217K. Véase también Granger y Read (2019), Regulación del Gasto Político en Victoria: Espacio para la Reforma, Tabla 2.1, https://www.researchgate.net/publication/340224579_Political_Expenditure_Regulation_in_Victoria_Room_for_Reform/lnk/5e7d9cc299bf1a91b7f1272/download, que establece los límites de gasto y la divulgación en todos los estados australianos.

²⁸ Véase Comité Permanente Conjunto sobre Asuntos Electorales (2021), Revisión de la Enmienda a la Legislación Electoral Ley de Reforma de la Financiación y Divulgación Electoral de 2018, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Electoral_Matters/Operationandimpact/Informe/sección?id=committees%2Freportint%2F024660%2F76176. Las nuevas disposiciones exigen que «los actores clave no partidistas... reportaran datos sobre su actividad de campaña, incluyendo una mayor transparencia para los activistas políticos que desempeñan un papel importante en las elecciones». 11

Si bien a nivel federal existe una regulación adicional mínima, los estados individuales van más allá.²⁹ Algunos estados aplican umbrales de divulgación más bajos y restringen por completo ciertas clases de donantes (p. ej., promotores inmobiliarios en Nueva Gales del Sur [NSW], Queensland y el Territorio de la Capital Australiana [ACT]). El Centro para la Integridad Pública identifica algún tipo de límite al gasto electoral en NSW, Queensland, Australia Meridional (SA), el ACT, el Territorio del Norte y Tasmania.³⁰ En cuanto a la puntualidad de la divulgación, estados como NSW, Victoria, ACT y SA exigen la divulgación de las donaciones políticas durante las elecciones en un plazo de 7 a 21 días. En Queensland, las donaciones políticas deben declararse en un plazo de siete días, independientemente de las elecciones. A nivel federal, no existen requisitos específicos durante los períodos electorales y la divulgación solo se exige anualmente (véase el Apéndice I sobre las diferentes normativas federales y estatales).³¹

Las donaciones políticas corporativas directas no son deducibles de impuestos en Australia. ³² Sin embargo, los gastos por cuenta propia y las suscripciones a asociaciones gremiales, que posteriormente pueden utilizarse con fines políticos, sí lo son. Las asociaciones gremiales pueden realizar, y de hecho realizan, donaciones políticas y participan en gastos políticos y actividades de cabildeo (véase el Apéndice G sobre la actividad política de las asociaciones gremiales). Las donaciones políticas procedentes del extranjero de 100 dólares australianos o más están prohibidas en Australia desde 2019.³³

Como ejemplo de cómo las empresas realizan gastos políticos indirectos, BHP tiene una política de no realizar contribuciones políticas: "Mantenemos una posición de imparcialidad con respecto a la política partidista y no realizamos contribuciones políticas ni gastos/donaciones con fines políticos a ningún partido político, político, funcionario electo o candidato a un cargo público en ningún país."³⁴ Sin embargo, los gastos por cuenta propia y los pagos a asociaciones comerciales no son cubiertos por la póliza. En 2009/10, BHP gastó 4,1 millones de dólares australianos en una campaña política australiana.³⁵

²⁹ Véase Muller (2022), Financiamiento y divulgación de elecciones en jurisdicciones australianas: una guía rápida, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/ElectionFundingStates; Tham (2018), Depende de lo que entiendas por "donaciones políticas".

<https://insidestory.org.au/depende-de-lo-que-quieres-dicir-con-donaciones-politicas/>.

³⁰ El Centro para la Integridad Pública (2022), Cómo nivelar el campo de juego: topes al gasto electoral, limitando la Beneficio de la titularidad y apoyo a nuevos candidatos, pág. 2, <https://publicintegrity.org.au/wp-content/uploads/2022/05/Briefing-note-How-to-level-the-playing-field.pdf>.

³¹ El Centro para la Integridad Pública (2022), Arrojando luz sobre el financiamiento político para las próximas elecciones federales, pág. 3, <https://publicintegrity.org.au/wp-content/uploads/2022/02/Dinero-oculto-2021.docx.pdf>.

³² Desde 2010, un contribuyente empresarial no puede reclamar deducciones por contribuciones y donaciones a partidos políticos, Miembros y candidatos, incluidos los pagos realizados para obtener ingresos imponibles. Véase la Ley de Modificación de las Leyes Tributarias (Contribuciones Políticas y Donaciones) de 2010 (Cth), <https://www.comlaw.gov.au/Details/C2010A00016>.

³³ AEC (2021), Donaciones extranjeras, https://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/financial_disclosure/files/foreign-donations-fact-sheet.pdf.

³⁴ BHP (nd), Interactuando con los gobiernos, <https://www.bhp.com/about/operating-ethically/interacting-with-governments>.

³⁵ AEC (2010), Declaración de terceros de BHP Billiton 2009-2010, <https://transparency.aec.gov.au/AnnualThirdParty/ReturnDetail?returnId=18583>.

Entre noviembre de 2016 y mayo de 2017, BHP donó 2,18 millones de dólares australianos a la Cámara de Minerales y Energía de Australia Occidental para gastos políticos relacionados con las elecciones estatales de Australia Occidental de 2017.³⁶

En mayo de 2015, la SEC desistió de los procedimientos contra BHP tras el pago por parte de esta de una multa de 25 millones de dólares. La SEC alegó que BHP había proporcionado beneficios a políticos en varias empresas africanas donde operaba en violación de la ley estadounidense.³⁷ No existe ninguna sanción estatal ni federal. equivalente a las disposiciones de divulgación de gastos de la Ley de Divulgación de Actividades de Cabildeo de los Estados Unidos de 1995.³⁸

2. Donaciones y gastos políticos corporativos en la práctica el Reino Unido, los EE. UU. y Australia

2.1. El Reino Unido

El gasto político directo de una empresa generalmente requiere la aprobación de los accionistas en la junta general anual.³⁹ Tras la introducción de la ley que exige el consentimiento mayoritario, muchas empresas dejaron de realizar donaciones políticas.⁴⁰ Si bien muchas empresas solicitan permiso preventivo a los accionistas para poder otorgar donaciones políticas, rara vez ejercen esta facultad y suelen revelar que no tienen intención de hacerlo. En 2015, 25 de las 40 principales empresas del FTSE 100 tenían alguna prohibición sobre las contribuciones políticas.⁴¹ El límite promedio de donaciones para el cual se solicitó aprobación en el periodo 2001-2010 fue de £100,000, pero el gasto real promedió solo una octava parte de esa cantidad.⁴²

Un estudio realizado en 2018 reveló que las empresas públicas que cotizan en el Reino Unido obtuvieron mejores resultados en transparencia política que un grupo más amplio de empresas, que incluía empresas privadas y multinacionales de propiedad extranjera. De este grupo más amplio, el 64 % tenía una política que limitaba o prohibía

³⁶ Elecciones WA (2017), Informe de las elecciones estatales de 2017 de la Cámara de Minerales y Energía, <https://www.elections.wa.gov.au/political-funding/document/1685>.

³⁷ Comisión de Bolsa y Valores (2015), En el asunto de BHP Billiton, <https://www.sec.gov/litigation/admin/2015/34-74998.pdf>.

³⁸ Para una descripción de la regulación de la conducta de los lobistas, la permisibilidad de los honorarios por éxito, etc. en Australia, véase McKeown (2014), ¿Quién paga al gaitero? Reglas para el cabildeo gubernamental en Australia, Canadá, Reino Unido y EE. UU., http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp14_15/Reglas_de_cabildeo.

³⁹ Watson y McKenzie (2022), Derechos de los accionistas en empresas privadas y públicas en el Reino Unido: descripción general, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-613-3685?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-613-3685?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

⁴⁰ Torres-Spelliscy y Fogel (2011), Gasto político corporativo autorizado por los accionistas en el Reino Unido, pág. 558, https://www.researchgate.net/publication/228160906_Shareholder-Authorized_Corporate_Political_Spending_in_the_UK.

⁴¹ Transparencia Internacional Reino Unido (2015), Índice de participación política corporativa 2015, págs. 3 y 12. <http://www.transparency.org.uk/publications/indice-de-compromiso-politico-corporativo-2015/>.

⁴² Torres-Spelliscy y Fogel (2011), Gasto político corporativo autorizado por los accionistas en el Reino Unido, págs. 565, 569. 13

Contribuciones políticas. Las categorías de desempeño más deficientes en los temas evaluados para las empresas del Reino Unido fueron "Lobby Responsable", que evalúa lo que las empresas hacen para influir directa e indirectamente en los responsables políticos; y "Puerta Giratoria", que aborda los riesgos asociados con los intercambios de personas entre los sectores privado y público. Si bien el 45% de la cohorte amplia contaba con una política pública sobre lobby responsable, el uso de asociaciones comerciales y cámaras de comercio sigue siendo opaco. Solo el 8% de la cohorte amplia publicó una lista completa de las organizaciones a las que pertenecía. En cuanto a la puerta giratoria, solo el 6% de las empresas publica detalles sobre las cesiones al sector público o desde él, y el 85% de las empresas no publica procedimientos que especifiquen los "períodos de incompatibilidad" para exfuncionarios públicos.⁴³

Las asociaciones comerciales de propietarios de activos, como la Asociación de Inversiones, generalmente se oponen a las donaciones políticas corporativas.⁴⁴ Los asesores de representación, como ISS y Glass Lewis, generalmente apoyan resoluciones de aprobación de límites bajos de precaución, con la expectativa de que las empresas no tengan la intención de utilizar esta autoridad para hacer donaciones políticas explícitas.⁴⁵

2.2. Estados Unidos

Desde que se presentaron las primeras resoluciones de accionistas sobre la divulgación de contribuciones políticas en 2004,⁴⁶ las resoluciones que buscan la divulgación de contribuciones políticas y gastos de lobby han sido comunes en los EE. UU., y se han implementado restricciones voluntarias al gasto político. aumentó.

Desde 2011, el Centro para la Responsabilidad Política (CPA), en colaboración con el Centro Zicklin para la Investigación de Ética Empresarial de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, publica el Índice CPA-Zicklin de Divulgación y Responsabilidad Política Corporativa. Se trata de una encuesta anual que evalúa a las empresas según un índice que las compara con sus políticas y prácticas de divulgación del gasto político, toma de decisiones y supervisión de la junta directiva.

⁴³ Transparencia Internacional Reino Unido (2018), Índice de participación política corporativa 2018, págs. 7, 12, 15, 18, 22, https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/1018_CPEI_Report_WEB-1.pdf.

⁴⁴ Por ejemplo, la Asociación de Inversiones (2015), Guía sobre la Ley de Sociedades y los Estatutos Sociales, pág. 4, <https://www.theia.org/sites/default/files/2019-06/20091001-CG-Companies-Act-and-Articles-of-Association-Guidance.pdf>, establece que «las empresas solicitan autorización para cubrir donaciones o gastos políticos dentro de la UE. La empresa debe afirmar que su política es no realizar donaciones políticas y que no tiene intención de utilizar dicha autorización para tal fin. Las autorizaciones pueden otorgarse por ley por un período de hasta cuatro años; sin embargo, la mejor práctica es solicitar la aprobación anualmente».

⁴⁵ ISS (2021), Directrices para el voto por poder en el Reino Unido e Irlanda, págs. 32-33, <https://www.issgovernance.com/file/policy/active/emea/UK-and-Ireland-Voting-Guidelines.pdf>; Directrices de políticas de Glass Lewis para el Reino Unido 2022, pág. 48, <https://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2021/11/UK-Voting-Guidelines-GL-2022.pdf>.

⁴⁶ Cossette (2011), Las corporaciones hacen donaciones políticas a riesgo de la ira de los accionistas, <https://www.businessinsider.com/las-corporaciones-hacen-donaciones-politicas-con-el-riesgo-de-la-ira-de-los-accionistas-2011-2>.

En las tres áreas de enfoque del índice, es decir, divulgación, políticas y supervisión, se ha observado una tendencia positiva en los últimos años, siendo la mejora en la supervisión del gasto político por parte de las juntas directivas la más destacada.

Tras el ataque al Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, muchos inversores intensificaron su escrutinio de las contribuciones políticas corporativas y los gastos de cabildeo. Muchas empresas se comprometieron a suspender las donaciones a políticos que votaron en contra de la certificación electoral, y otras anunciaron que pausarían o revisarían sus donaciones políticas en general.⁴⁷ Sin embargo, las contribuciones de empresas y asociaciones del sector a estos miembros del Congreso han continuado,⁴⁸ y existe un creciente interés público por comprender si los compromisos de las empresas se reflejan en sus acciones.

2.3. Australia

En marcado contraste con la situación en los EE. UU. y el Reino Unido, en Australia, los requisitos legales son limitados a nivel federal y hay poca divulgación voluntaria de información por parte de las empresas. No ha sido común buscar la aprobación de los accionistas para las contribuciones políticas corporativas, y las actitudes de las empresas hacia la divulgación pública parecen variar ampliamente. Incluso si las empresas publican la divulgación voluntaria, la ausencia de definiciones establecidas y claras de lo que se considera una donación política, o gasto político corporativo en un sentido más amplio, plantea desafíos significativos en la evaluación de dichas divulgaciones de manera sistemática. A menudo, no queda claro si la empresa está utilizando un lenguaje deliberadamente ambiguo al abordar el gasto político, o si la ambigüedad refleja una falta de atención debido a los bajos niveles de gasto. A diferencia de los EE. UU., Australia ha sido lenta en desarrollar equivalentes de Super PAC, probablemente porque las donaciones directas son legales. El estudio de caso en el Apéndice D describe los desafíos que uno podría encontrar al investigar información pública sobre el gasto político corporativo.

El Centro Australasiano para la Responsabilidad Corporativa (ACCR) mantiene una lista de ESG Resoluciones de accionistas con temática de Medio Ambiente, Social y Gobernanza consideradas en ASX-

⁴⁷ Miller (2021), Estas son las empresas estadounidenses que están pausando sus donaciones políticas.

Español: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-11/heres-what-us-companies-are-doing-with-political-donations#xj4y7vzkq>; Gangitano (2021), Estas son las empresas que suspenden sus contribuciones políticas tras los disturbios del Capitolio, <https://thehill.com/business-a-lobbying/533795-here-are-the-companies-suspending-political-contributions-following-the-capitol-riots>.

⁴⁸ Gawehns y Meli (2022), ¿Están las empresas estadounidenses castigando a los republicanos por el 6 de enero? Esto es lo que nuestra investigación revela, <https://www.washingtonpost.com/politics/2022/01/05/corporations-are-punishing-republicans/>; CREW (2021), La sedición es presentada por..., <https://www.citizensforethics.org/reports-investigations/crew-reports/this-sedition-is-brought-to-you-by/>. 15

Juntas Generales Anuales (JGA) cotizadas. Según dicha lista,^[49] nunca se ha adoptado una resolución que aborde el gasto político directo en ninguna empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (ASX). Sin embargo, esto no significa que algunos de los fenómenos que han impulsado políticas públicas más estrictas, así como el escrutinio y la supervisión de los accionistas en el Reino Unido y Estados Unidos, no se hayan producido en Australia. Recientemente, ha aumentado el interés de los accionistas por la cuestión de si el consejo de administración de una empresa garantiza que los intereses tanto de la empresa como de sus accionistas coincidan con las actividades de cabildio de las asociaciones comerciales a las que pertenece (véase el Apéndice F sobre las brechas entre las políticas corporativas y la membresía en asociaciones sectoriales). Las propuestas de los accionistas sobre cabildio relacionado con el clima recibieron el apoyo mayoritario de tres empresas de la ASX en 2021.^[50]

3. Conducta de las empresas australianas: contexto internacional

Como ya se describió en las secciones anteriores, tanto la legislación como la conducta corporativa en materia de gasto político pueden variar significativamente entre jurisdicciones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las diferentes circunstancias al comparar la conducta relacionada con el gasto político corporativo a nivel mundial. La siguiente sección presenta el Índice CPA-Zicklin aplicado a empresas estadounidenses en 2021, incluyendo un resumen de los resultados. A continuación, se presenta una versión ligeramente adaptada del Índice CPA-Zicklin, que se utiliza para evaluar a las empresas australianas, y se proporciona un resumen de los resultados correspondientes.

3.1. Conducta en los EE. UU.

El Índice CPA-Zicklin se publica anualmente y evalúa las políticas y prácticas de divulgación y rendición de cuentas de las empresas del S&P 500. El índice abarca tres áreas: divulgación, políticas y supervisión. La primera evalúa la divulgación de las contribuciones políticas de las empresas, como las contribuciones a partidos y candidatos, asociaciones gremiales o gastos políticos independientes. La segunda evalúa si la empresa divulga una política que rija los gastos políticos procedentes de fondos corporativos, así como el grado de detalle e información de dichas políticas. La tercera evalúa la divulgación de los mecanismos para la aprobación, revisión y supervisión de las contribuciones políticas por parte de la junta directiva. La puntuación se basa en información pública, y se comparten las puntuaciones y explicaciones preliminares.

⁴⁹ Consulte ACCR (2022), Resoluciones de accionistas ESG de Australia, <https://www.accr.org.au/research/australian-esg-historial-de-votacion-de-resoluciones/>.

⁵⁰ ISS (2021), Revisión de la temporada 2021 de Australia y Nueva Zelanda, págs. 14-15, <https://insights.issgovernance.com/posts/revision-de-la-temporada-de-australia-y-nueva-zelanda-2021/>.

con las entidades evaluadas. En algunos casos, se realizan conversaciones de seguimiento con las empresas evaluadas.

Las puntuaciones de los indicadores se dividen en tres categorías: a los indicadores estándar se les asignó una puntuación máxima de 2, mientras que a los indicadores clave de rendimiento se les asignó una puntuación más alta, con una puntuación máxima de 4 o 6. Un indicador (11) no se calificó; sus resultados se recopilaron únicamente con fines informativos. Las puntuaciones numéricas se asignaron según el siguiente sistema:

- Una respuesta de “No” a un indicador resultó en una puntuación de cero;
- una respuesta de “Sí” o “No aplicable (N/A)” resultó en la puntuación máxima; y
- una respuesta de “Parcial” resultó en la mitad de la puntuación máxima.

Puede encontrar ejemplos de mejores prácticas en el Apéndice A y más detalles sobre el enfoque metodológico en el sitio web dedicado al Índice CPA-Zicklin.⁵¹

El informe CPA-Zicklin Index 2021⁵² sobre las políticas de divulgación política y rendición de cuentas de las empresas estadounidenses del S&P 500 hizo las siguientes observaciones:

- Ha habido una tendencia positiva a lo largo de los años en los Estados Unidos, con puntajes promedio aumentando constantemente.
- El 64% de las empresas revelaron una política detallada que rige los gastos políticos de fondos corporativos.
- El 60% de las empresas requirieron algún tipo de supervisión de la junta directiva sobre políticas corporativas. gasto.
- El 57% de las empresas revelaron información total o parcial sobre los pagos a asociaciones comerciales, o dijeron que dieron instrucciones a las asociaciones comerciales para que no utilizaran estos pagos en material relacionado con las elecciones.
- El 45% de las empresas revelaron pagos a organizaciones de bienestar social sin fines de lucro (c)(4), tenían una política que prohibía las contribuciones a estos grupos o tenían una política que instruía a dichos grupos a no utilizar las contribuciones para fines políticos (véase también el Apéndice E sobre el gasto político corporativo en los Estados Unidos).

3.2. Conducta de las empresas australianas: 75 empresas de la ASX

Se adaptó una versión del Índice CPA-Zicklin al contexto australiano y se aplicó a 75 empresas de la Bolsa de Valores de Australia (ASX). Para facilitar la comparabilidad, las preguntas y la puntuación se han mantenido lo más similares posible a las utilizadas en el Índice CPA-Zicklin de 2021 y representan una actualización de un...

⁵¹ CPA (nd), Índice CPA-Zicklin: un enfoque en la transparencia, <https://www.politicalaccountability.net/cpa-zicklin-index/>.

⁵² Centro de Ética Empresarial e Investigación CPA & Zicklin (2021) Índice CPA-Zicklin 2021 de Divulgación Política Corporativa y Responsabilidad, págs. 18, 20, 25, <https://www.politicalaccountability.net/2021-cpa-zicklin-index/>. 17

Versión anterior del índice, adaptada para Australia por la ACCR en 2016.⁵³ En consonancia con el Índice CPA-Zicklin original, la versión australiana evalúa la divulgación, las políticas y la supervisión. Para la evaluación, solo se consideró información pública disponible. En general, se evaluó a las empresas en función de 24 preguntas en una escala de tres niveles:

- Se otorgó una puntuación máxima por la divulgación completa de la respectiva categoría de gasto de interés o una prohibición de dicho gasto sin excepciones.
- Se otorgó la mitad de la puntuación máxima por divulgación/prohibición parcial.
- Se otorgó una puntuación de cero por no haber divulgación relevante disponible.

Una diferencia importante entre el índice original y la versión personalizada australiana es el hecho de que en esta última, el gasto en lobby se consideró relevante para algunas de las preguntas de evaluación, mientras que el tema no estaba cubierto por el Índice CPA-Zicklin 2021 original.

El Apéndice B enumera los indicadores adaptados aplicados al contexto australiano, así como sus puntuaciones máximas correspondientes. El gasto corporativo relacionado con actividades de lobby se incluyó explícitamente en el indicador 19 y también debía abordarse en los indicadores 7, 8, 10, 12 y 15-16 para alcanzar la puntuación máxima.

Las empresas que prohibieron claramente la categoría relevante de pagos políticos (es decir, a partidos políticos y candidatos, a activistas y entidades asociadas, por cuenta propia, a asociaciones comerciales, etc.) recibieron una puntuación completa según correspondiera en los indicadores 1 a 5, y luego recibieron automáticamente puntuaciones parciales en una serie de preguntas (es decir, indicadores 8-9, 12-16, 18, 20, 22-23), ya que las contribuciones políticas relevantes fueron abordadas parcialmente y excluidas.

El Apéndice C proporciona más detalles sobre el proceso de evaluación, así como la lista de empresas incluidas en la misma. Para un análisis del papel de la industria de recursos y energía, específicamente en la realización de donaciones políticas, véase el Apéndice H.

Entre las 75 empresas de ASX evaluadas en 2022:

- Aproximadamente el 25% de las empresas tenían una política que prohibía el uso directo de información corporativa de gastos políticos;
 - entre las empresas que no prohibieron completamente los gastos políticos directos, sólo seis revelaron sus gastos políticos directos de manera detallada;
- Ninguna empresa reveló detalles de sus gastos de cabildeo; Ninguna empresa reveló completamente los pagos a asociaciones comerciales ni afirmó haberles ordenado que no los utilizaran con fines políticos. Solo cuatro empresas revelaron parcialmente dichos pagos.
- ninguna empresa reveló pagos a centros de estudios o grupos sin fines de lucro, tenía una política que impedía las contribuciones a estos grupos o les había dado instrucciones de no utilizar los fondos.

⁵³ Pender (2016), Gasto político corporativo en Australia, págs. 28-30. 18

contribuciones con fines políticos. Solo una empresa divulgó parcialmente dichas contribuciones;

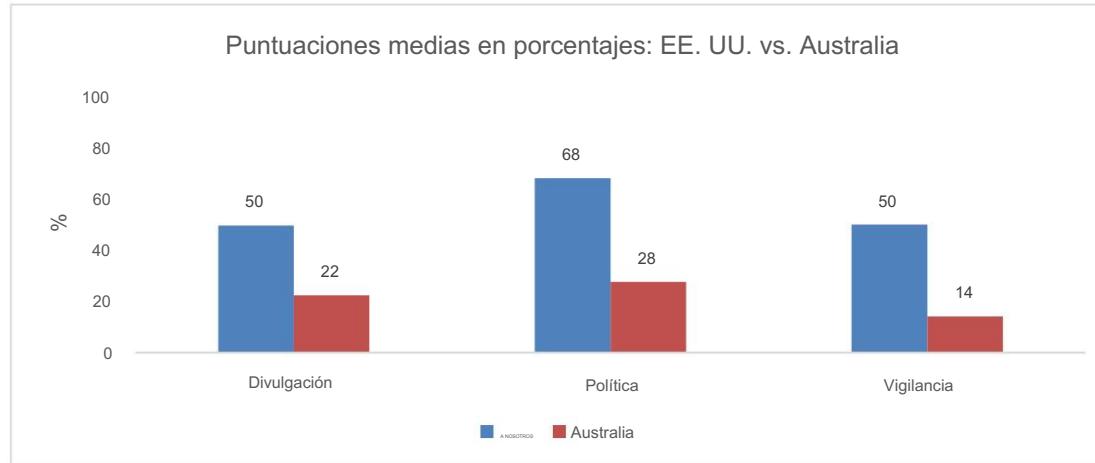
- El 60% de las empresas publicaron los títulos de altos directivos que tienen autoridad sobre algunas partes de las decisiones de gasto político de las empresas, principalmente relacionadas con la aprobación para asistir a eventos organizados por partidos políticos o sus asociados (véase el indicador 15); y
- El 45% de las empresas contaban con políticas corporativas⁵⁴ que abordaban parcialmente las contribuciones políticas relevantes y que estaban sujetas a revisión periódica por parte del directorio (véase el indicador 17).

3.3. Comparación de la conducta empresarial en Australia y Estados Unidos

En esta sección, se comparan los resultados del índice CPA-Zicklin original aplicado a empresas estadounidenses (S&P 500) con los resultados obtenidos al aplicar la versión personalizada descrita anteriormente a 75 empresas de la ASX.

La puntuación media total de las empresas estadounidenses fue del 54,1 % en una escala de 0 a 100 %. La puntuación media total de 75 empresas de la Bolsa de Valores de Australia (ASX) fue del 21,6 %. La Figura 1 muestra las puntuaciones medias desagregadas de las empresas estadounidenses y australianas en los tres grandes temas de divulgación, políticas y supervisión.⁵⁵

Figura 1: Puntuaciones promedio de EE. UU. frente a Australia



Las amplias diferencias se hacen más evidentes cuando analizamos las puntuaciones con una lente más granular.

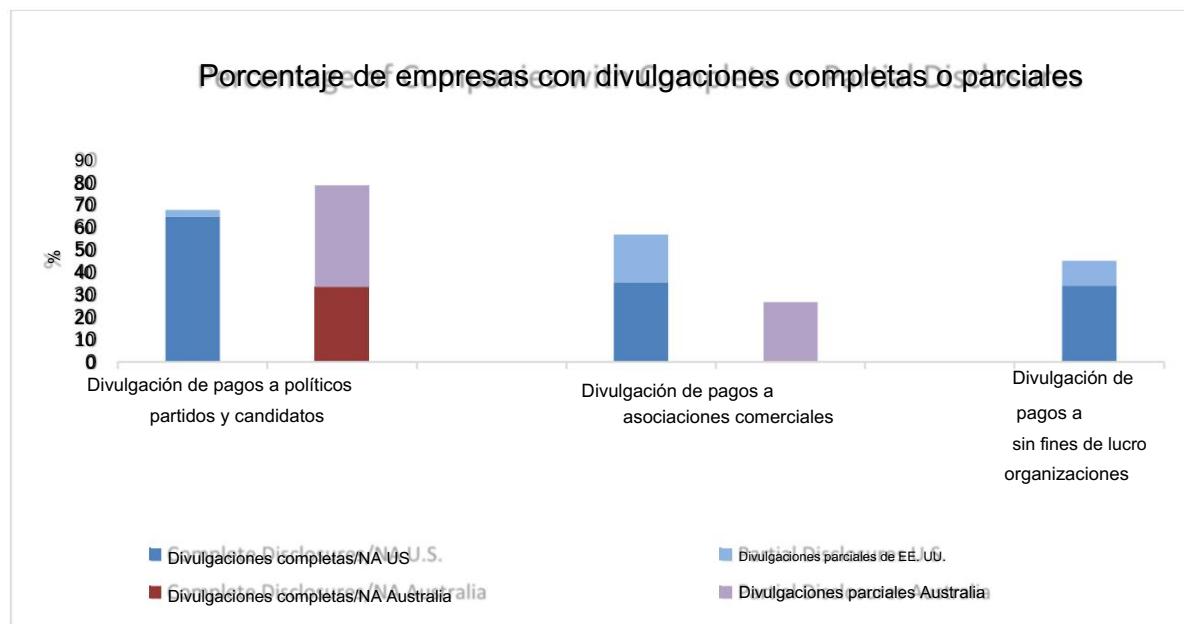
La Figura 2 muestra que ninguna empresa australiana reveló completamente sus pagos a asociaciones comerciales o grupos sin fines de lucro que puedan estar involucrados en actividades políticas, mientras que un número considerable

⁵⁴ Incluyendo políticas dedicadas a donaciones políticas, políticas antisoborno y anticorrupción, código de conducta, etc.

⁵⁵ Consulte el Apéndice C para conocer los indicadores individuales cubiertos.

De las empresas estadounidenses sí proporcionaron dicha información. Varias empresas australianas sí proporcionaron información parcial (representada por la barra violeta) para estas métricas. La barra azul claro representa la información parcial de sus homólogas estadounidenses.

Figura 2: Porcentaje de empresas con información completa (incluida la que no corresponde) o parcial



Más del 70% de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) examinadas revelaron parcialmente pagos a partidos políticos y candidatos. Esto incluyó a todas aquellas empresas cuyas operaciones se realizan principalmente en Australia.⁵⁶ Esto se debe a que las empresas están obligadas a revelar las donaciones superiores a un monto límite realizadas a partidos políticos federales australianos. Por extensión, existen requisitos de divulgación para la mayoría de las operaciones de cualquier empresa que opere principalmente en Australia. Sin embargo, dado que la divulgación no es obligatoria para todos los pagos (las donaciones inferiores al importe mínimo, por ejemplo, están exentas), estas empresas solo obtuvieron una puntuación parcial en este indicador.

⁵⁶ Se consideró que una empresa operaba principalmente en Australia si incurría en más de 2/3 de ingresos operativos en Australia o si 2/3 de los activos no corrientes estuvieran ubicados en Australia (si es relevante para el modelo de negocio de la respectiva empresa). 20

Conclusión

Este informe examina el escrutinio y la supervisión, tanto por parte de los accionistas como del público en general, del gasto político corporativo en Australia. El informe interpreta el gasto político de forma amplia, incluyendo tanto los gastos directos, incluyendo las donaciones en forma de pagos "excedentes" para asistir a eventos y la publicidad política por cuenta propia, como los gastos indirectos a través de terceros que pueden utilizarse con fines políticos. En tres países (Reino Unido, Estados Unidos y Australia), se observan diferentes enfoques en las respectivas leyes que rigen el gasto político corporativo. Es probable que estos reflejen la relevancia e importancia que las empresas, así como los accionistas y el público en general, asignan a este tema, lo que a su vez podría explicar en parte los diferentes resultados en las políticas y la divulgación de información sobre el gasto político y los procedimientos de gobernanza relacionados.

Se ha comprobado que Australia tiene el enfoque legal más permisivo. Este enfoque implica poca divulgación sistemática por parte de las empresas que pueda interpretarse de forma significativa, y la divulgación voluntaria sigue siendo escasa. Como resultado, la cantidad y el patrón del gasto político corporativo en Australia —y, en consecuencia, el impacto de dicho gasto en la política australiana— son difíciles de cuantificar hasta que la divulgación esté disponible de forma sistemática y comparable.

Sin esa divulgación, también es difícil evaluar si el gasto político corporativo es o no pertinente a la evaluación que hacen los accionistas de la gestión del directorio: los intereses de los ejecutivos de la empresa y de los directores del directorio, por un lado, y de los accionistas, por el otro, podrían ser potencialmente divergentes.

Incluso pequeñas cantidades gastadas con fines políticos pueden tener un impacto significativo en las políticas públicas. Las empresas deben ser conscientes del riesgo de que las actividades políticas corporativas puedan tener una influencia desproporcionada en los debates de políticas públicas —especialmente cuando las llevan a cabo grandes corporaciones — en comparación con otros grupos de interés dotados de menos recursos financieros.

Dado que las empresas dependen de una democracia pública saludable para planificar la seguridad y las operaciones estables de la empresa, la prevención de una influencia indebida en las políticas públicas, las leyes y las reglamentaciones debería ser lo mejor para las autoridades que toman las decisiones de una empresa, así como para sus accionistas.

La divulgación, ya sea voluntaria u obligatoria, y los procedimientos definidos para involucrar proactivamente a los accionistas en las decisiones sobre si gastar o no los fondos corporativos y cómo hacerlo, serán esenciales para garantizar que el gasto político corporativo promueva los intereses a largo plazo de los accionistas y respalde las instituciones democráticas.

Apéndice A – El índice CPA-Zicklin y las divulgaciones de mejores prácticas en los EE. UU.

El Centro de Responsabilidad Política (CPA)

El CPA es una organización estadounidense sin fines de lucro y apartidista, creada en noviembre de 2003 para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto político corporativo. Los objetivos del Centro son fomentar la actividad política corporativa responsable, proteger a los accionistas y fortalecer la integridad del proceso político. Gracias a los esfuerzos del CPA y sus socios, un número creciente de empresas cotizadas líderes han adoptado medidas de divulgación y supervisión política. El CPA publica anualmente un índice que evalúa a las empresas del S&P 500 según sus políticas y prácticas de divulgación y rendición de cuentas política. Información completa sobre el CPA:

El índice Zicklin, que incluye información de fondo, enfoque metodológico y resultados de la evaluación, se puede encontrar en su sitio web dedicado.⁵⁷

Índice CPA-Zicklin 2021. Este índice se

ha desarrollado para el contexto estadounidense y aborda la divulgación, las políticas y la supervisión relacionadas con el gasto político corporativo. Evalúa la divulgación de las contribuciones corporativas a candidatos, partidos y comités políticos; grupos 527; iniciativas electorales; asociaciones comerciales; y organizaciones de "bienestar social" 501(c)(4), así como cualquier gasto político independiente. Las puntuaciones altas en una categoría de gasto particular, como se indica anteriormente (por ejemplo, contribuciones corporativas a candidatos, partidos y comités políticos), pueden resultar de una divulgación exhaustiva o de una política que excluya claramente dicho gasto. A continuación, se proporcionan algunos ejemplos de mejores prácticas que se presentan en el Índice CPA-Zicklin 2021 de empresas que lograron la puntuación general máxima posible a modo ilustrativo.

propósitos.

AT&T es un ejemplo de buenas prácticas en cuanto a la divulgación detallada de las categorías mencionadas en su sitio web del Informe de Participación Política. Esta divulgación incluye descripciones y enlaces a las posiciones y políticas relevantes de la compañía, así como un archivo fácilmente accesible de informes anteriores:⁵⁸

Las contribuciones políticas, cuando están permitidas, son una parte importante del proceso político.

Este Informe busca brindar transparencia sobre nuestras contribuciones corporativas, así como las realizadas por los Comités de Acción Política (PAC) de nuestros empleados. En resumen:

⁵⁷ CPA (nd), Índice CPA-Zicklin: un enfoque en la transparencia, <https://www.politicalaccountability.net/cpa-zicklin-index/>.

⁵⁸ AT&T (sin fecha), Contribuciones políticas, <https://about.att.com/csr/home/governance/political-engagement.html#Contributions>. 22

- Nuestros empleados pueden participar en el proceso político a través de los PAC (Comités de Acción Política) de empleados. Los desembolsos de los PAC apoyan a candidatos federales, estatales o locales y se divultan en este Informe.
- Cuando es legal, realizamos contribuciones políticas corporativas a candidatos estatales y locales, partidos políticos, comités de acción política (PAC) y comités de medidas electorales. Dichas contribuciones se divultan en este Informe.
- No hacemos contribuciones políticas corporativas a partidos políticos federales ni candidatos a un cargo federal.
- Como práctica general, no realizamos gastos políticos independientes ni contribuciones políticas corporativas a comités de gastos independientes ni a ningún comité político que no sea de candidatos o de partidos políticos organizado bajo la Sección 527 del Código de Rentas Internas (por ejemplo, Super PAC); sin embargo, si lo hacemos, los divulgamos en este Informe.
- Entre otros factores, las contribuciones generalmente se hacen a candidatos que apoyan a un sector privado fuerte y una filosofía de libre empresa.

Además, nuestra información va más allá de las contribuciones políticas. Cuando una asociación comercial u otra organización exenta de impuestos utiliza nuestras contribuciones para actividades de cabildeo, las divulgamos como se describe a continuación. (...)

Accenture PLC es un ejemplo de empresa que prohíbe claramente las contribuciones políticas. Su política sobre contribuciones políticas y cabildeo, publicada en su sitio web⁵⁹, establece lo siguiente sobre las contribuciones directas e indirectas: «La empresa mantiene una política global de larga data contra las contribuciones a partidos políticos, comités políticos o candidatos utilizando recursos de la empresa (incluidos servicios monetarios y en especie), incluso cuando lo permita la ley».

La empresa especifica además que en EE. UU., “la empresa tiene prohibido utilizar recursos de la empresa para realizar gastos de campaña independientes o contribuir a medidas electorales estatales o locales, organizaciones que no sean de candidatos (como comités anfitriones de convenciones políticas) u organizaciones organizadas bajo la Sección 527 del Código de Rentas Internas de EE. UU.”.

Cuando se trata de pagos a asociaciones comerciales, la política de la empresa especifica además que las asociaciones comerciales de EE. UU. tienen instrucciones de “no utilizar los fondos de la empresa para gastos de campaña independientes o contribuciones a ningún candidato federal, estatal o local, medida electoral, comité de partido, organización no candidata (como comités anfitriones de convenciones políticas) u organizaciones organizadas bajo la Sección 527 del Código de Rentas Internas”.

Los ejemplos de buenas prácticas para divulgar, en lugar de prohibir, los pagos a asociaciones comerciales ofrecen un lenguaje claro sobre la información que se divulga y la presentación de informes oportunos. Visa Inc. se encuentra entre las empresas que reciben la máxima puntuación en divulgación de información a asociaciones comerciales, y su política establece lo siguiente:

⁵⁹ Accenture (sf), Contribuciones políticas y política de lobby, <https://www.accenture.com/us-en/about/governance/political-contributions-policy>. 23

El Departamento de Participación Gubernamental también divulgará públicamente una lista de las asociaciones comerciales estadounidenses de las que la Compañía es miembro y cuyas cuotas anuales de membresía son de \$25,000 o más. Si corresponde, la Compañía divulgará el monto de las cuotas declaradas por las asociaciones comerciales como contribuciones políticas, si las hubiera, en el Informe Anual de Contribuciones. Dicha divulgación también incluirá la naturaleza de las contribuciones políticas declaradas por las asociaciones comerciales.

En lo que respecta a las políticas de gasto político, se espera que una política articulada permita evaluar los riesgos y beneficios del gasto político, medir si dicho gasto es coherente y está alineado con los objetivos y valores generales de la empresa, determinar su justificación y evaluar si cumple con sus objetivos. Intel ofrece una política de buenas prácticas para supervisar si la actividad política de una empresa se alinea con sus valores fundamentales:

Evaluamos periódicamente la eficacia y la alineación de nuestro gasto político como parte de nuestro proceso de contribuciones. Reconocemos que es poco práctico y poco realista esperar que nuestra empresa, accionistas y partes interesadas estén de acuerdo con todos los temas que un político o asociación comercial pueda apoyar, especialmente dada nuestra estrategia de donaciones bipartidistas. (...) Evaluamos el historial general de votación de los beneficiarios en relación con nuestros temas clave de política y tomamos decisiones de financiación que, en conjunto, creemos que serán las más beneficiosas para nuestros accionistas y partes interesadas clave. Las decisiones también se toman en función de los estados y distritos con una importante presencia de Intel y liderazgo en comités de jurisdicción sobre importantes prioridades de Intel. En respuesta a los comentarios de las partes interesadas, hemos mejorado aún más nuestro proceso de revisión añadiendo revisiones de declaraciones públicas a nuestras revisiones existentes de los registros de votación para evaluar mejor la alineación con nuestros valores. Cuando identificamos algún grado de desajuste, nos comunicamos directamente con los beneficiarios de las contribuciones. En caso de desajuste significativo en nuestros múltiples temas clave de política pública, tomamos medidas para realinear futuras decisiones de financiación. Por ejemplo, tras los sucesos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, decidimos suspender las contribuciones a los miembros del Congreso que votaron en contra de la certificación de las elecciones presidenciales de 2020".⁶⁰ 60

La supervisión y rendición de cuentas del gasto político es el tercer pilar del índice. La supervisión del gasto político corporativo por parte del consejo garantiza la rendición de cuentas interna ante los accionistas y otras partes interesadas. Para lograrlo, los directores deben poder decidir si la empresa debe realizar gastos relacionados con las elecciones; si divulgar dichos gastos; y garantizar la implementación de políticas, procedimientos y supervisión adecuados.

⁶⁰ Intel (2021), Informe de Responsabilidad Corporativa 2020-21, pág. 25,
<http://csrreportbuilder.intel.com/pdfbuilder/pdfs/CSR-2020-21-Informe-completo.pdf>.

Los procedimientos de mejores prácticas en materia de gasto político con fondos corporativos que se aplican en HP Inc. se describen a continuación:

El Comité de Nominaciones, Gobernanza y Responsabilidad Social (NGSR) de la Junta Directiva, compuesto en su totalidad por directores externos, supervisa las contribuciones políticas, incluido el uso de fondos corporativos. El Director Global de Relaciones Gubernamentales de HP presenta un plan político anual prospectivo para el PAC y las contribuciones corporativas al comité NGSR para su revisión e informa sobre la actividad de relaciones gubernamentales del año anterior en este momento. El plan político para el año siguiente se desarrolla en colaboración con el Director Ejecutivo de Relaciones Gubernamentales para las Américas con la participación de los equipos federales, estatales y locales de EE. UU. Tras la aprobación del plan político anual por parte de la Junta Directiva del PAC de HP, este se presenta al comité NGSR de la junta. La Junta Directiva del PAC y los asesores externos son responsables de revisar la política de contribuciones políticas y cualquier actualización posterior, que también se presenta al comité NGSR. (...) Las contribuciones corporativas se realizarán de forma limitada a los candidatos estatales y locales donde el estado

Las leyes lo permiten. Estas contribuciones son aprobadas por el Director Global de Relaciones Gubernamentales de HP como parte del plan anual de participación política, que requiere la aprobación de la Junta del PAC, y se presentan al comité NGSR de la Junta.

⁶¹ HP (2020), Política de contribuciones políticas de HP, <https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c05517313.pdf>, 25

Apéndice B – Versión australiana personalizada del índice CPA-Zicklin

En esta sección se brindan más detalles sobre cómo se personalizó la métrica de puntuación para Australia, dando información sobre cómo se desagregó en tres áreas (divulgación, política y supervisión) y sobre los indicadores individuales y las puntuaciones máximas que indican la relevancia de cada uno de los indicadores.

Divulgación

Los indicadores de divulgación 1 a 9 evaluaron si las empresas divultan todas las contribuciones, donaciones, pagos,⁶² suscripciones o beneficios en especie proporcionados a políticos, políticos candidatos, partidos políticos, entidades asociadas (como clubes 500 y sindicatos), asociaciones comerciales, grupos de presión, centros de estudios, grupos activistas y otras organizaciones.

Los elementos esenciales de esta divulgación son:

1. Nombres de los destinatarios;
- y 2. Cantidad donadas.

Este material debe ser fácilmente accesible en el sitio web de la empresa. Además:

- La empresa debe revelar las contribuciones políticas y los gastos de asociaciones comerciales y otras organizaciones de las que la empresa es miembro, patrocinador de eventos o donante;
- la empresa debe revelar los cargos de los altos directivos y los comités de la junta que tener autoridad final sobre cualquier decisión de gasto político; y
- se debe hacer público un archivo de los gastos políticos de la empresa, desde el momento en que inició la divulgación pública.

Teniendo en cuenta los requisitos de la AEC sobre la divulgación del gasto político a nivel federal, se ha diferenciado entre las empresas que operan principalmente en Australia y las que operan principalmente en el extranjero. En el caso de las primeras, los indicadores 1 y 2 recibieron una puntuación parcial, incluso en ausencia de divulgación por parte de las respectivas empresas, ya que la AEC (a) exige a las empresas que informen sobre las contribuciones a partidos políticos, candidatos y entidades asociadas, y (b) los activistas políticos/terceros significativos deben informar sobre los fondos recibidos de las empresas. En ambos casos, se aplicó un umbral de divulgación de 14.300 dólares australianos para el ejercicio 2020/21.

⁶³ Además, la ley electoral federal de Australia requería la declaración de gastos de campaña a la AEC, por lo que se otorgó una puntuación parcial para el indicador 3. Las empresas que operan principalmente en Nueva Zelanda reciben puntuaciones parciales para los indicadores 3 y

⁶² Esto incluye los pagos “en exceso”, donde el monto pagado excede el valor inmediato y tangible de los bienes o servicios provistos: por ejemplo, pagos para asistir a eventos de recaudación de fondos organizados por entidades asociadas a partidos políticos.

⁶³ AEC (2022), Umbral de divulgación,

https://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/public_funding/threshold.htm

7, porque una persona con gastos por cuenta propia para asuntos electorales, cuando se utilizan para influir en el resultado de un referéndum, estaría obligada a registrarse como "promotor registrado" si gastara por encima del umbral de NZD 14.700,64

	Indicador	Máx. puntaje
1.	¿La empresa revela públicamente las contribuciones corporativas a candidatos y partidos políticos, incluidos los nombres de los destinatarios y los montos donados?	4
2.	¿La empresa revela públicamente los pagos a organizaciones políticamente activas (que no sean candidatos y partidos como en el punto 1) y que no sean asociaciones comerciales como en el punto 4), por ejemplo, entidades asociadas y activistas políticos, incluidos los nombres de los destinatarios y los montos entregados?	4
3.	¿La empresa revela públicamente los gastos políticos independientes realizados en apoyo directo o en oposición a una campaña, incluidos los nombres de los destinatarios y las cantidades donadas?	4
4.	¿La empresa revela públicamente los pagos a asociaciones comerciales que el destinatario realiza? ¿Qué puede hacer una organización para utilizarla con fines políticos?	6
5.	¿La empresa revela públicamente los pagos a otras organizaciones sin fines de lucro, como grupos de expertos, que el destinatario pueda utilizar con fines políticos?	6
6.	¿La propia empresa divulga públicamente una lista de los importes y destinatarios de los pagos realizados por asociaciones comerciales u otras organizaciones sin fines de lucro de las que la empresa es miembro o donante?	2
7.	¿La empresa revela públicamente los pagos realizados para influir en el resultado de cuestiones políticamente controvertidas, medidas electorales, referendos o plebiscitos, incluidos los nombres de los destinatarios y los montos donados?	4
8.	¿La empresa revela públicamente los nombres de los altos directivos de la empresa (por puesto/título de las personas involucradas) que tienen la autoridad final sobre las decisiones de gasto político de la empresa?	2
9.	¿La empresa divulga públicamente un archivo de cada informe de gastos políticos, incluidas todas las contribuciones directas y/o indirectas, correspondiente a cada año desde que la empresa comenzó a divulgar la información (o al menos durante los últimos cinco años)?	4

Puntuación máxima de divulgación posible

36

⁶⁴ Véase la Ley Electoral de 1993 (Nueva Zelanda), artículo 204B(1)(d).

https://www.austlii.edu.au/nz/legis/consol_act/ea1993103.pdf. La Comisión Electoral de Nueva Zelanda publica una lista de promotores registrados y una lista de los gastos de cada promotor si estos superan los 100.000 NZD. El gasto en elecciones y referendos está sujeto por separado a estos límites. Véase Comisión Electoral (Nueva Zelanda) (2020), Elecciones Generales y Referendos de 2020, <https://elections.nz/democracy-in-nz/historical-events/2020-general-election-and-referendums/registered-promoter-expenses-for-the-2020-general-election/>.

Política.

Los indicadores 10 a 1665 evalúan si las empresas divultan una política detallada que rige todas sus contribuciones políticas provenientes de fondos corporativos. Una política detallada explica quién toma las decisiones, con base en qué prioridades de política pública; a qué entidades la empresa puede o no realizar donaciones; y si existe supervisión por parte del consejo.

Además, dicha política debería:

- Establecer que las contribuciones políticas se realizarán sin tener en cuenta los intereses políticos privados, preferencias de directores y ejecutivos; y • describir los acuerdos para la gestión y supervisión del directorio.

10. ¿La empresa revela una política detallada que rige sus gastos políticos procedentes de los fondos corporativos y de las filiales sobre las que tiene control operativo?	6
11. ¿Tiene la empresa una política disponible públicamente que permita contribuciones políticas? ¿Sólo a través de contribuciones voluntarias financiadas por los empleados?	No anotó
12. ¿Tiene la empresa una política disponible públicamente que establezca que todas sus contribuciones promoverán los intereses de la empresa y se realizarán sin tener en cuenta las preferencias políticas privadas de los directores y ejecutivos?	2
13. ¿La empresa describe públicamente los tipos de entidades que se consideran adecuadas? ¿Destinatarios del gasto político de la empresa?	2
14. ¿La empresa describe públicamente sus posiciones de política pública que se convierten en la base? ¿Para sus decisiones de gasto con fondos corporativos?	2
15. ¿Tiene la empresa una política disponible públicamente que requiera que los altos directivos supervisen y tengan la autoridad final sobre todo el gasto político de la empresa?	2
16. ¿Tiene la empresa una política disponible públicamente que establece que el consejo directivo supervisa periódicamente la actividad política corporativa de la empresa?	2

Puntuación máxima posible de la política

16

⁶⁵ Cabe señalar que el indicador 11, que se relaciona con el funcionamiento de los PAC en los EE. UU., no se ha evaluado en Australia.

Supervisión

Los indicadores 17 a 24 evalúan la divulgación de los acuerdos para la aprobación, revisión y supervisión de las contribuciones políticas por parte del comité de la junta.

Además, la empresa debería:

- Publicar en su sitio web, semestralmente, un informe detallado sobre su gasto político; y • divulgar un proceso interno o una declaración afirmativa sobre cómo garantizar el cumplimiento de su política de gasto político.

17. ¿Tiene la empresa un comité directivo específico que revisa la política de la empresa sobre gastos políticos?	2
18. ¿La empresa tiene un comité directivo específico que revisa las políticas de la empresa? ¿Gastos políticos directos realizados con fondos corporativos?	2
19. ¿Tiene la empresa un comité directivo específico que revisa los gastos políticos indirectos de la empresa realizados con fondos corporativos: por ejemplo, actividades de lobby y pagos a asociaciones comerciales y otras organizaciones sin fines de lucro que puedan utilizarse con fines políticos?	2
20. ¿La empresa tiene un comité de directorio específico que aprueba las políticas? ¿Gastos de fondos corporativos?	2
21. ¿La empresa cuenta con un comité directivo específico, compuesto enteramente por directores no ejecutivos independientes, que supervisa su actividad política?	2
22. ¿La empresa publica en su sitio web un informe detallado de su gasto político con ¿Fondos corporativos semestralmente?	4
23. ¿La empresa pone a disposición una página web dedicada a la divulgación política? ¿A través de una búsqueda o accesible con tres clics del ratón desde la página de inicio?	2
24. ¿La empresa divulga un proceso interno o una declaración afirmativa sobre ¿Cómo garantizar el cumplimiento de su política de gasto político?	2

Puntuación máxima posible de supervisión

18

Puntuación bruta total posible

70

Apéndice C – Resultados de la puntuación de 75 empresas de la ASX

En total, se calificaron 75 empresas de la ASX utilizando esta métrica. Estas 75 empresas constituyen el ASX5066 (excluyendo Vanguard Australian Shares Index ETF y Magellan Global Fund, que son fondos cotizados en bolsa y no corporaciones), además de 27 empresas adicionales fuera del ASX 50 (todas las empresas enumeradas a continuación). Estas 27 empresas adicionales se seleccionaron en función de su afiliación a asociaciones comerciales, relevancia económica y/o historial de donaciones políticas. Las evaluaciones se realizaron con base en informes corporativos disponibles públicamente⁶⁷ entre mayo y agosto de 2022 y finalizaron el 31 de agosto de 2022.⁶⁸ Se contactó a las 75 empresas para obtener comentarios sobre su calificación. Seis empresas proporcionaron retroalimentación activamente. Las políticas internas sobre contribuciones políticas no se consideraron para esta evaluación.

Los detalles de las 24 preguntas de la métrica se presentan en el Apéndice B.

Los resultados generales de las 75 empresas de ASX evaluadas se detallan en la siguiente tabla (en orden alfabético):

#	Nombre del emisor	Corazón	Puntuaciones de 2022 en Porcentajes
1	Afterpay Limitado	APTO	5,7%
2	AGL Energy Limited	AGL	44,3%
3	Amcor Plc	AMCR	11,4%
4	AMP Ltd.	AMPERIO	21,4%
5	Ampol Limitada	ALD	15,7%
6	Grupo APA	APA	27,1%
7	Aristocrat Leisure Limited	TODO	34,3%
8	ASX Limitada	-----	25,7%
9	Aeropuerto Internacional de Auckland Limitado	AIA	18,6%
10	Aurizon Holdings Ltd.	AZJ	21,4%
11	Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda Limitado	ANZ	28,6%
12	Banco Bendigo y Adelaida Limitado	Ben	12,9%
13	Grupo BHP Limitada	BHP	38,6%
14	Bluescope Steel Limited	-----	10,0%
15	Zarzas limitadas	BXB	35,7%
16	Challenger Limited	CGF	38,6%
17	Cochlear Limited	COH	5,7%
18	Grupo Coles Ltd.	COLUMN	14,3%
19	Banco de la Commonwealth de Australia	-----	12,9%

⁶⁶ Al 28 de abril de 2022.

⁶⁷ Por lo general, esto incluía informes anuales, informes de sostenibilidad, declaraciones de gobierno corporativo, informes corporativos, etc. políticas (por ejemplo, políticas de contribuciones políticas, código de conducta, políticas contra el soborno y la corrupción) y divulgaciones en la página web de la empresa.

⁶⁸ Los cambios posteriores a esa fecha no se contabilizan. 30

20	Computershare Limited	UPC	34,3%
21	Crown Resorts Limited	CWN	14,3%
22	CSL Limitada	CSL	8,6%
23	Dexus	DXS	38,6%
24	Downer EDI Limited	DOW	17,1%
25	Endeavour Group Ltd. (Australia)	VED	15,7%
26	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited	FPH	32,9%
27	Grupo de metales Fortescue Ltd.	FMG	24,3%
28	Grupo Helia (anteriormente Genworth Mortgage Australia)	HLI	21,4%
29	Grupo Goodman	GMG	7,1%
30	Harvey Norman Holdings Ltd.	HVN	40,0%
31	IGO Ltd.	VOY	25,7%
32	Incitec Pivot Limited	IPL	34,3%
33	Grupo de seguros Australia Ltd.	IAG	17,1%
34	Industrias James Hardie plc	JHX	1,4%
35	JB Hi-Fi Limited	JBH	18,6%
36	Grupo Lendlease	—	7,1%
37	Grupo Macquarie Limitado	MQG	17,1%
38	Metcash Limited	MTS	8,6%
39	Recursos minerales limitados	MINIMO	22,9%
40	Grupo Mirvac	MONSEÑOR	38,6%
41	Banco Nacional de Australia Limitado	COGER	38,6%
42	Newcrest Mining Ltd.	NCM	38,6%
43	Nine Entertainment Co Holdings Limited	—	8,6%
44	Recursos de la estrella del norte Ltd.	NST	8,6%
45	Orica Ltda.	ORI	31,4%
46	Origin Energy Limited	ORG	32,9%
47	Orora Ltd.	ORA	4,3%
48	OZ Minerals Limited	OZL	21,4%
49	Qantas Airways Limited	QAN	35,7%
50	Grupo de seguros QBE Limited	QBE	4,3%
51	Ramsay Health Care Limited	RHC	11,4%
52	Grupo REA Ltd.	REA	8,6%
53	Reece Limited	REH	4,3%
54	ResMed Inc.	RMD	18,6%
55	Rio Tinto Limited	Río	42,9%
56	Santos Limitada	STO	14,3%
57	Grupo Scentre	SCG	27,1%
58	Buscar limitado	—	15,7%
59	Sonic Healthcare Limited	SHL	4,3%
60	South32 Ltd.	S32	11,4%
61	Stockland	SGP	38,6%

62	Grupo Suncorp Limitada	SOL	18,6%
63	Tabcorp Holdings Limited	TAH	32,9%
64	Telstra Corporation Limited	TLS	17,1%
65	El grupo de entretenimiento Star Limited	SGR	25,7%
66	TPG Telecom Ltd.	TPG	37,1%
67	Grupo Transurban Ltd.	TCL	15,7%
68	Centros de cercanías	VCX	42,9%
69	Washington H. Soul Pattinson y Compañía Limitada	SOL	8,6%
70	Wesfarmers Limited	Oeste	25,7%
71	Corporación Bancaria Westpac	WBC	15,7%
72	Wisetech Global Ltd.	WTC	7,1%
73	Woodside Petroleum Ltd.	WPL	32,9%
74	Grupo Woolworths Limitada	¡GUAU!	11,4%
75	Xero Limited	XRO	34,3%

Apéndice D – Llegando al fondo del gasto político corporativo

El gasto político corporativo es un campo muy amplio. Como ciudadano o accionista interesado que desea comprender cómo y dónde las empresas destinan su gasto político, debe tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Para comprender mejor cómo fluye el dinero de las corporaciones a causas políticas, existen dos opciones: 1) asegurarse de que no se haya realizado ningún gasto político corporativo, o 2) asegurarse de que todo el gasto político corporativo se publique de forma transparente, suficientemente detallada y fácil de entender.

Actualmente en Australia, el gasto político se puede dividir en dos categorías principales: directo e indirectos. Cualquier forma de gasto puede implicar la provisión de beneficios en especie.

El gasto político directo puede subdividirse a su vez. En primer lugar, se refiere a donaciones y otros pagos en beneficio de políticos, candidatos, partidos, sus asociados u organizaciones de apoyo a partidos o campañas. En segundo lugar, se refiere al llamado gasto por cuenta propia, que se realiza con la intención de influir en la opinión pública, aunque puede ser imparcial y no estar relacionado con políticos o candidatos específicos.

El gasto político indirecto, por otra parte, se refiere al gasto que pasa a través de un tercero, como asociaciones comerciales, grupos de presión, centros de estudios y grupos activistas (ya sean grupos legítimos de base o grupos artificiales) que se gasta, o podría gastarse, con fines políticos.

Una regla general muy aproximada para Australia (basada en la experiencia estadounidense previa a Citizens United) es que la proporción entre el gasto indirecto y el directo probablemente sea de un orden de magnitud; es decir, es probable que el gasto indirecto sea diez veces mayor que el gasto directo. A nivel federal en Estados Unidos, durante el ciclo electoral de 2010, el gasto en cabildeo corporativo superó en catorce veces el gasto en campañas.

En los siguientes párrafos, se analiza únicamente el gasto político a nivel federal. Como se mencionó anteriormente, existen diferencias significativas en la regulación a nivel estatal, así como normas dispares entre estados en cuanto a los umbrales utilizados para la divulgación obligatoria, la introducción de límites a las donaciones y la prohibición total de donaciones políticas para ciertos representantes del sector.

Gasto político directo

A nivel federal, el primer tipo de gasto político directo, si lo realiza una empresa, debe revelarse a la Comisión Electoral Australiana (AEC) en una Declaración Anual de Donantes.

Los gastos por cuenta propia a nivel federal, es decir, los gastos de campaña a nivel federal, también deben divulgarse.⁶⁹

Por lo tanto, se podría pensar que un ciudadano o accionista interesado debería poder rastrear fácilmente el gasto político federal de una empresa en el sitio web de la AEC. Sin embargo, intentar hacerlo enfrentará varios desafíos. En primer lugar, la navegación en el sitio web de la AEC no es sencilla. Si un usuario encuentra las Declaraciones Anuales de Donantes en el Registro de Transparencia, puede filtrar por el donante corporativo de interés y consultar las Declaraciones Anuales de Donantes de la empresa.

La divulgación generalmente se consolida a nivel de grupo (aunque no siempre), por lo que un usuario podría necesitar investigar las subsidiarias de la empresa del grupo de interés para estar seguro de considerar todas las entidades relevantes para el análisis deseado.

La empresa de petróleo y gas Santos sirve como ejemplo. Según su política, detallada en su Código de Conducta, Santos “no realiza donaciones en efectivo a ningún partido político en su nombre ni proporciona pagos de facilitación ni beneficios que puedan interpretarse como soborno a un organismo gubernamental”. A primera vista, esta política parece excluir las donaciones políticas. Sin embargo, su prohibición explícitamente solo abarca las donaciones en efectivo a partidos políticos, lo que deja abierta la posibilidad de realizar donaciones en especie a partidos, así como donaciones en efectivo y en especie a candidatos o políticos en general.

En la Declaración Anual de Donantes más reciente de Santos, presentada para el período 2020-2170, hay dos entradas en la sección "Detalles de Donaciones Realizadas a Partidos Políticos": 44.000 dólares australianos al Partido Laborista Australiano (ALP) y 22.000 dólares australianos al Partido Nacional de Australia. Si las políticas corporativas prohíben las donaciones en efectivo a partidos políticos, cabe preguntarse qué constituyen estas cantidades. Una respuesta es que podrían ser donaciones en especie, ya que no están prohibidas por la política de la empresa, o, potencialmente, pagos "excedentes" para acceder a eventos que se consideran gastos por cuenta propia o relacionados con campañas. Dichos pagos deben informarse a la AEC, pero aparentemente no están excluidos por la prohibición de la empresa sobre las "donaciones en efectivo a partidos políticos".

Otras empresas son más claras en sus comunicaciones sobre el gasto político. Por ejemplo, el Código de Conducta de Qantas especifica que «No se deben realizar donaciones políticas (ni en efectivo ni en especie) (ni a ningún funcionario gubernamental, partido político, representante de un partido político, comité electoral o candidato político) directa ni indirectamente en nombre del Grupo Qantas. (...)»

Los empleados pueden asistir a conferencias de partidos políticos y funciones políticas en su calidad de empleados solo con la aprobación de un miembro relevante del Comité de Gestión del Grupo (o el Presidente de la Junta si es un Director) por razones comerciales y cuando el precio cobrado no sea

⁶⁹ En algunos estados, se deben divulgar los gastos de campaña a nivel estatal. Para un ejemplo de estado Para obtener más información sobre la divulgación en este contexto, consulte: https://www.elections.wa.gov.au/sites/default/files/political_funding/SGE17%20-%20FD8%20-%20CámarasMineralesEnergía.pdf.

⁷⁰ AEC (2021), Declaración de Santos 2020-21, <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BDGAW0>.

que excede el valor comercial de la conferencia o evento". Se prohíben las donaciones en efectivo y en especie a partidos y candidatos, y la compañía también especifica que no se permiten pagos excesivos por asistir a eventos.

De acuerdo con su política, Qantas no presenta...

El donante regresa con la AEC.

En lugar de prohibir las contribuciones políticas corporativas, algunas empresas optan por divulgar las contribuciones políticas que realizan. Sin embargo, las leyes federales de divulgación tienen un alcance limitado.

Lo más importante es que la divulgación obligatoria solo se requiere para las contribuciones a los partidos federales, sus delegaciones estatales y candidatos, y a ciertos terceros, y solo para las contribuciones individuales que superen un monto umbral (AUD 14.300 en 2020/21).⁷¹ Por lo tanto, es posible que una empresa haga donaciones en varias cuotas, cada una por debajo del umbral, sin generar obligaciones de divulgación.

Algunas empresas revelan pagos por debajo del umbral: Macquarie Group, por ejemplo, especifica que "declara todo el dinero pagado a los partidos políticos a la Comisión Electoral Australiana (AEC), independientemente de cualquier umbral u otras disposiciones que puedan limitar la necesidad de divulgación" ⁷² para descartar la posibilidad de que dichos pagos no se revelen.

Gasto político indirecto

Los pagos que se consideran gastos políticos indirectos son aún más difíciles de desagregar y rastrear. Los pagos corporativos a terceros no están sujetos a la obligación de informar a la AEC, a pesar de que estas organizaciones pueden desempeñar un papel importante en la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos.

Algunas empresas, como Harvey Norman, ⁷³ tienen políticas que prohíben las donaciones indirectas o contribuciones indirectas a partidos políticos o candidatos. Otras empresas, como el Grupo Helia (anteriormente Genworth Mortgage Australia), ⁷⁴ declaran públicamente que no hacen ninguna contribución indirecta. Sin embargo, aún no está claro qué abarcan exactamente dichas políticas o divulgaciones. Helia Group, por ejemplo, divulga su membresía en varios organismos del sector en su informe de sostenibilidad, pero no menciona las cuotas de membresía ni otros pagos realizados a dichos organismos.⁷⁵ Sería beneficioso contar con información completa sobre las cuotas pagadas y que la lista de membresías con organismos del sector fuera exhaustiva.

⁷¹ AEC (2022), Umbral de divulgación, https://www.aec.gov.au/parties_and_representatives/public_funding/threshold.htm.

⁷² Macquarie Group (sf), Contribuciones y compromiso político, pág. 2, <https://www.macquarie.com/assets/macq/impact/esg/policies/political-contributions-and-engagement.pdf>.

⁷³ Harvey Norman (2021), Política contra el soborno y la corrupción, pág. 3, https://cdn.shopify.com/s/files/1/0629/4326/5020/files/HNHL_Anti-Bribery_and_Corruption_Policy_Version_3.0_April_Final_for_Publication_2021_a165d996-d583-49a3-8d1d-024ed9e70b48.pdf?v=1652834967.

⁷⁴ Genworth (2021), Informe de sostenibilidad 2021, pág. 20, <https://www.genworth.com.au/media/jwbfy0ke/2021-informe-de-sostenibilidad.pdf>.

⁷⁵ Genworth (2021), Informe de Sostenibilidad 2021, pág. 21.

Ante la falta de obligaciones de divulgación aplicables a las empresas que realizan contribuciones políticas indirectas, la divulgación voluntaria de dichos pagos es escasa. Solo unas pocas empresas, como AGL Energy, BHP y el Banco de Australia y Nueva Zelanda (ANZ), divulgán voluntariamente detalles sobre las cuotas a asociaciones gremiales. Al evaluar las 75 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), no se encontró ninguna divulgación voluntaria de otros gastos políticos indirectos, como los pagos a terceros distintos de las asociaciones gremiales. No todos los pagos corporativos a asociaciones gremiales y otros terceros constituyen necesariamente gastos políticos. Sin embargo, si el uso de los fondos corporativos no está restringido, estos pueden utilizarse con fines políticos.

Si bien no existen obligaciones de divulgación para las empresas que realizan pagos a las asociaciones comerciales, algunas asociaciones comerciales, así como algunas otras organizaciones que podrían recibir dinero corporativo, están sujetas a las leyes de divulgación australianas como "terceros importantes" (anteriormente "campañas políticas").⁷⁶ GetUp! y Advance Australia no están directamente asociadas con ningún partido político o candidato establecido, pero participan activamente en campañas relacionadas con temas específicos y, por lo tanto, se clasifican como "terceros significativos". Lo mismo ocurre con asociaciones comerciales como el Consejo Empresarial de Australia (BCA), el Consejo de Minerales de Australia (MCA) y la Asociación Australiana de Producción y Exploración de Petróleo (APPEA), entre muchas otras. Algunas asociaciones comerciales, como el Consejo de Minerales de Australia⁷⁷ y APPEA⁷⁸, también realizan donaciones directas a partidos políticos.

Los requisitos de divulgación utilizados por la AEC de conformidad con la ley electoral federal no trazan una línea clara entre el dinero corporativo recibido por asociaciones políticamente activas, como "entidades asociadas" o "terceros significativos", y gastado para fines políticos, y los pagos recibidos sin dimensión política (por ejemplo, aquellos pagos que las empresas informan a la AEC bajo la categoría "Otros ingresos").⁷⁹ Por lo tanto, la información pública disponible, especialmente sobre el gasto político indirecto, a menudo es inadecuada para que un ciudadano o un accionista evalúe en qué medida el dinero de una empresa se está utilizando para la actividad política.

⁷⁶ AEC (2022), Terceros significativos, https://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/financial_disclosure/guides/significant-third-parties.htm.

⁷⁷ AEC (2021), Declaración de divulgación del Consejo de Minerales de Australia, <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BDGGE0>.

⁷⁸ AEC (2021), Declaración de divulgación de APPEA, <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BDJBQ1>.

⁷⁹ Véase, por ejemplo, la Declaración de Divulgación de Entidades Asociadas para 2020-21 del Sindicato Australiano de la Industria Ferroviaria, Tranvía y Autobuses, Sucursal de Queensland, que incluye los pagos recibidos como "Otros Ingresos" del operador ferroviario Aurizon: AEC (2021), Declaración de Divulgación de Entidades Asociadas del Sindicato Australiano de la Industria Ferroviaria, Tranvía y Autobuses, <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVAF1>. Lo más probable es que se trate de cuotas sindicales de empleados. 36

Apéndice E – El gasto político corporativo y sus posibles impactos en la democracia en Estados Unidos

Este estudio de caso examina el impacto del gasto político no responsable en la democracia, centrándose en el gasto político corporativo y sus posibles consecuencias. El Centro para la Responsabilidad Política (CPA) publicó en abril de 2022 un informe titulado "Apuesta Práctica - 80" , que investiga el flujo de dinero de las corporaciones, el gasto político y la democracia.

Las corporaciones se enfrentan a influyentes tomadores de decisiones políticas en las instituciones democráticas de Estados Unidos. El informe argumenta que el gasto político irresponsable representa un riesgo significativo para la democracia, afectando en última instancia a las empresas que operan en dicho entorno.

La decisión de 2010 del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Citizens United permitió que grupos independientes, como los Super PAC y las organizaciones sin fines de lucro, gastaran fondos corporativos ilimitados en publicidad ⁸¹ para influir en los resultados electorales, siempre y cuando no se declaren formalmente de campaña en coordinación con un partido político o candidato. Como resultado, el gasto político independiente se ha disparado,⁸² alcanzando los 1.400 millones de dólares estadounidenses en el ciclo electoral de 2016.⁸³ Este hecho ha suscitado inquietud sobre cómo las corporaciones utilizan este canal para ejercer influencia política.

Si bien muchas empresas proclaman públicamente su compromiso con las instituciones democráticas, el informe de la CPA destaca casos en los que el gasto político de una empresa contradice sus compromisos públicos. Algunas empresas apoyan resultados políticos que pueden ser perjudiciales para sus intereses comerciales o accionistas, o apoyan a organizaciones o campañas que socavan las instituciones y los valores democráticos. Por ejemplo, el informe señala la presunta participación de empresas estadounidenses que cotizan en bolsa en la financiación de grupos relacionados con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Una investigación realizada por la CPA revela que empresas públicas y asociaciones comerciales gastaron US\$17 millones en la Asociación de Fiscales Generales Republicanos (RAGA) durante el ciclo electoral de 2020.⁸⁴ RAGA es una organización 52785 autorizada a recibir contribuciones ilimitadas y gastar cantidades ilimitadas. El Fondo de Defensa del Estado de Derecho (RLDF), una rama de RAGA, es una organización 501(c)(4)⁸⁵ que no está obligada a revelar sus donantes, lo que la categoriza como una organización de dinero oscuro.

⁸⁰ Centro para la Responsabilidad Política (2022), Participación práctica: corporaciones, gasto político y democracia. <https://www.politicalaccountability.net/wp-content/uploads/2022/04/Parte-Práctica.pdf>.

⁸¹ <https://www.opensecrets.org/outspending/rules.php>.

⁸² Evers-Hillstrom (2020), Más dinero, menos transparencia: una década bajo el gobierno de Citizens United, <https://www.opensecrets.org/news/reports/una-decada-bajo-ciudadanos-unidos>.

⁸³ Lincoln (2020), Diez años después de Citizens United, <https://www.citizen.org/article/ten-years-after-citizens-united/>.

⁸⁴ Centro para la Responsabilidad Política (2022), Practical Stake, pág. 19.

⁸⁵ <https://www.opensecrets.org/527s/basics.php> <https://>

⁸⁶ <https://s3.documentcloud.org/documents/21164104/rule-of-law-defense-fund-2020-990.pdf>. 37

La presunta participación del RLDF en la protesta del Capitolio plantea dudas sobre su cumplimiento de su misión declarada.

Si bien algunas voces argumentan que el gasto político corporativo generalmente es perjudicial para las empresas debido a los riesgos asociados y las distracciones de las operaciones principales,⁸⁷ numerosas empresas estadounidenses continúan incurriendo en gastos políticos. Por lo tanto, las empresas deben abordar el potencial riesgos de tal participación.

El Código de Conducta Modelo CPA-Zicklin para el Gasto Político Corporativo⁸⁸ ofrece un marco para que las empresas estadounidenses evalúen los objetivos y riesgos de su gasto político. El código proporciona orientación sobre cómo regular la participación política, no solo para mitigar riesgos, sino también para demostrar el compromiso de la empresa con la ciudadanía responsable y la participación responsable en el proceso democrático. Al adherirse a estos estándares, las empresas pueden gestionar mejor su papel en las actividades políticas, a la vez que defienden los valores y la integridad democráticos.

⁸⁷ Strine y Lund (2022), El gasto político corporativo es un mal negocio: cómo minimizar los riesgos y centrarse en lo que importa, <https://corpgov.law.harvard.edu/2022/01/11/corporate-political-spending-is-bad-business-how-to-minimize-the-risks-and-focus-on-what-counts/>.

⁸⁸ Centro de Investigación de Ética Empresarial CPA & Zicklin (2020), Código de Conducta Modelo CPA-Zicklin para el Gasto Político Corporativo, <https://www.politicalaccountability.net/wp-content/uploads/2022/06/CPA-Zicklin-Model-Code-of-Conduct-for-Corporate-Political-Spending.pdf>. 38

Apéndice F – Alineación de las actividades políticas corporativas con los valores corporativos

A medida que un número cada vez mayor de empresas australianas se comprometen a lograr emisiones netas cero,⁸⁹ existe un mayor escrutinio público sobre su desempeño en el cumplimiento de sus objetivos declarados. Sin embargo, algunas empresas y asociaciones sectoriales de primer nivel han adoptado posturas a favor de los combustibles fósiles y en contra de las regulaciones climáticas.⁹⁰ Debido a que las empresas pueden participar en política debido al gasto público y al cabildeo, tanto directo como a través de asociaciones sectoriales, las empresas pueden tener una representación variable en los debates políticos.

Informes y análisis han arrojado luz sobre la inconsistencia en la participación de ciertas asociaciones industriales en cuestiones climáticas. Por ejemplo, se dice que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, a pesar de presentarse como un actor activo en la lucha contra el cambio climático,⁹¹ tiene un historial de obstrucción a la acción climática mediante sus actividades de cabildeo, con ejecutivos de empresas energéticas financiando, participando y formando parte de las juntas directivas de grupos opuestos a la acción climática.⁹² De igual manera, la participación del Consejo de Minerales de Australia en la política climática se considera incompatible con el asesoramiento científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), a pesar de que afirma su ambición de lograr cero emisiones netas.⁹³

Además, un análisis de InfluenceMap reveló que en Australia el sector de los combustibles fósiles está muy involucrado en el cabildeo climático, mientras que “el creciente apoyo de las empresas a los objetivos de emisiones netas cero para 2050 no había sido respaldado por medidas para impulsar las políticas necesarias para cumplir los objetivos del acuerdo de París”. niveles de⁹⁴ Por lo tanto, parece haber una brecha entre participación de los representantes a favor y en contra del clima, lo que añade otro nivel de complejidad a esta cuestión.

Gestionar cuidadosamente la participación política corporativa es esencial para evitar inconsistencias entre los compromisos de una empresa y sus acciones. Para abordar posibles inconsistencias, las empresas deben divulgar de forma transparente su membresía en el sector y establecer procesos para revisar periódicamente dicha membresía y las respectivas actividades de cabildeo, de modo que los inversores puedan comparar las políticas declaradas de la empresa con las acciones que han tomado, tanto directas como indirectamente.

⁸⁹ Patten (2021), Las empresas del ASX200 comprometidas con los objetivos de cero emisiones netas se triplican en un año, [https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/asx200-companies-committee-to-netzero-targets-treble-in-a-year-20210820-p58kkp](https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/asx200-companies-committee-to-net-zero-targets-treble-in-a-year-20210820-p58kkp).

⁹⁰ InfluenceMap (2020), Asociaciones industriales australianas y su huella de política de carbono, <https://influencemap.org/report/Australian-Industry-Groups-And-their-Carbon-Policy-Footprint-c0f1578c92f9c6782614da1b5a5ce94f>.

⁹¹ <https://www.uschamber.com/cambio-climatico/la-posicion-climatica-de-las-camaras-la-inacion-no-es-una-opcion>.

⁹² Triedman (2021), Cámara de obstrucción: los discursos cambiantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre el cambio climático, 1989-2009, <http://www.climatedevlab.brown.edu/home/new-cdl-reports-chamber-of-obstruction>.

⁹³ <https://data.influencemap.org/influencer/Consejo-de-Minerales-de-Australia-MCA>.

⁹⁴Kurmelovs (2021), Se insta a las empresas pro-clima de Australia a presionar más al gobierno, <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/09/australias-pro-climate-companies-urged-to-lobby-government-more>. 39

Este paso ayudará a gestionar los riesgos asociados a posibles brechas entre las posiciones públicas y las acciones adoptadas.

La supervisión del consejo directivo desempeña un papel crucial para garantizar la coherencia entre las políticas corporativas y su implementación. Actualmente, la información disponible sobre la supervisión del consejo directivo australiano respecto a la participación política es limitada, lo que brinda la oportunidad de mejorar la divulgación de información por parte de las empresas y el análisis por parte de los inversores. Además, será esencial contar con procedimientos claros para involucrar proactivamente a los accionistas en las decisiones sobre el gasto político corporativo y las actividades de cabildeo para promover los intereses a largo plazo de los accionistas.

Apéndice G – Investigación de la participación política corporativa a través de asociaciones industriales

Comprender los vínculos corporativos con las asociaciones industriales y su influencia en los resultados políticos es un desafío en Australia debido a la falta de divulgación sistemática y consistente.

Si bien las donaciones políticas directas no son deducibles de impuestos, los gastos por cuenta propia y las suscripciones a asociaciones gremiales sí lo son. Esta situación puede incentivar a las empresas a participar en actividades políticas que impliquen estos últimos gastos. Si bien el impacto de las asociaciones sectoriales en los resultados políticos es indiscutible en Australia, las juntas directivas no están obligadas a revelar a los accionistas las asociaciones sectoriales a las que la empresa está afiliada. Además, la información pública disponible sobre la afiliación a asociaciones gremiales y las contribuciones financieras es limitada, lo que dificulta comprender el alcance de la participación de las empresas y los fines de su financiación.

El desafío radica en recopilar la afiliación de las empresas a asociaciones gremiales basándose en información pública. Un análisis más detallado de las empresas South32 y Rio Tinto, y sus vínculos con asociaciones gremiales como el Consejo Empresarial de Australia (BCA) y el Consejo de Minerales de Australia (MCA), puede brindar información sobre los posibles desafíos.

Los pagos a asociaciones industriales pueden estar sujetos a los requisitos de información de la Comisión Electoral Australiana (AEC), si la parte receptora se considera un "tercero significativo" ⁹⁵ (anteriormente un "activista político"). La BCA y la MCA son dos asociaciones que caen dentro de este alcance y figuran como terceros significativos. En 2020-21, la BCA recibió más de AU\$14 millones, ⁹⁶ mientras que la MCA recibió más de AU\$22 millones para el mismo período de informe.⁹⁷ Según la divulgación de Terceros Significativos de la AEC, South32 y Rio Tinto proporcionaron fondos tanto a la BCA como a la MCA en 2021 y en el pasado. Sin embargo, no aparecen presentaciones de Declaraciones de Donantes de la AEC al buscar en el Registro de Transparencia de la AEC para las dos empresas.⁹⁸ La comparación de los gastos divulgados por la BCA y la MCA con los de la AEC presenta un panorama mixto. En 2018-19, antes de las elecciones federales de mayo de 2019 (las últimas elecciones para las que se dispone de gastos electorales de ambas organizaciones), la BCA informó AU\$245.564 en gastos electorales,⁹⁹ mientras que la MCA informó AU\$0,100. Si bien la MCA no informó ningún gasto electoral, realizó donaciones directas a partidos políticos por un monto de AU\$146.730.

⁹⁵ https://www.aec.gov.au/Parties_and_Representatives/financial_disclosure/guides/significant-third-parties.htm.

⁹⁶ [Español: https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVHC6](https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVHC6), pág. 3. <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVHC6>, pág. 3. <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVHC6>

⁹⁷ <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVFF9>, pág. 3. <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=80-BCVFF9>

⁹⁸ <https://transparency.aec.gov.au/AnnualDonor>. <https://transparency.aec.gov.au/AnnualDonor>

⁹⁹ <https://transparency.aec.gov.au/AnnualSignificantThirdParty/ReturnDetail?returnId=64500>.

¹⁰⁰ <https://transparency.azure.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=76-BAllG1>, pág. 4.41

antes de las elecciones federales de 2019.¹⁰¹ Los montos revelados recibidos exceden los montos revelados gastado con creces, lo que deja un alto nivel de incertidumbre sobre el uso de los fondos recibidos.

Al revisar las divulgaciones corporativas en sus sitios web, Rio Tinto proporciona un documento sobre las divulgaciones de las asociaciones industriales, que enumera sus cinco principales membresías, por cuotas.¹⁰² Si bien la MCA figura como la asociación con la cuota anual más alta pagada, que asciende a AU\$1,965,000, la BCA no aparece entre las cinco principales. Las cinco cuotas de membresía divulgadas por Rio Tinto dan una indicación del volumen de dichos pagos, que ascienden a aproximadamente AU\$5.5 millones. Una referencia a la membresía de Rio Tinto con la BCA aparece en un apéndice del documento, que enumera las asociaciones industriales que toman posiciones sobre el cambio climático y la energía.¹⁰³ South32 divulga ambas membresías en su sitio web, aunque las cuotas pagadas se proporcionan solo en rangos.¹⁰⁴ Para ambos ejemplos de empresas, se sugiere que las listas proporcionadas no son exhaustivas y sigue sin estar claro cuáles son los criterios subyacentes para las divulgaciones de membresía.

Ambas empresas declaran públicamente que descartan realizar “cualquier tipo de pago a partidos políticos o candidatos políticos” (Rio Tinto),¹⁰⁵ o realizar “donaciones políticas en efectivo o en especie a cualquier partido político, político, funcionario de un partido político, funcionario electo o candidato a un cargo público en cualquier país” (South32).¹⁰⁶ Dado que la MCA realiza donaciones directas a partidos políticos, es difícil argumentar que los fondos corporativos a la MCA no se incluyen en el ámbito de las donaciones políticas, aunque sea indirectamente. Sin embargo, dichas contribuciones indirectas no parecen estar cubiertas por las declaraciones de la empresa, ni están sujetas a las obligaciones obligatorias de divulgación de la AEC para las empresas.

La falta de transparencia en la participación de las empresas en asociaciones sectoriales dificulta comprender la influencia que ejercen a través de estas. Para abordar este problema, se debe establecer un marco de divulgación integral y transparente que permita a las partes interesadas, especialmente a los accionistas, evaluar la coherencia de las actividades políticas corporativas con los valores y compromisos corporativos declarados. Unas prácticas de divulgación mejoradas y unos criterios de presentación de informes claros podrían mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la participación política corporativa, contribuyendo a un panorama de donaciones políticas más informado y responsable en Australia.

¹⁰¹ <https://transparency.aec.gov.au/Download/ReturnImageByMoniker?moniker=76-BARJC3>, págs. 10. <https://cdn-rio.dataweavers.io/-/media/content/documents/sustainability/ethics-and-integrity/iad/rt-divulgacion-de-la-asociacion-industrial-2022.pdf?rev=c9f8e891546e4480b80f9fd8d1b0862f>, págs. 4.

¹⁰² <https://cdn-rio.dataweavers.io/-/media/content/documents/sustainability/ethics-and-integrity/iad/rt-divulgacion-de-la-asociacion-industrial-2022.pdf?rev=c9f8e891546e4480b80f9fd8d1b0862f>, págs. 6.

¹⁰³ <https://www.south32.net/sobre-nosotros/gobernanza-corporativa/asociaciones-industriales>. <https://cdn-rio.dataweavers.io/-/media/content/documents/sustainability/ethics-and-integrity/iad/rt-divulgacion-de-la-asociacion-industrial-2022.pdf?rev=c9f8e891546e4480b80f9fd8d1b0862f>, págs. 20.

¹⁰⁴ <https://www.south32.net/sobre-nosotros/gobernanza-corporativa/asociaciones-industriales>. <https://cdn-rio.dataweavers.io/-/media/content/documents/sustainability/ethics-and-integrity/iad/rt-divulgacion-de-la-asociacion-industrial-2022.pdf?rev=c9f8e891546e4480b80f9fd8d1b0862f>, págs. 20.

¹⁰⁵ https://www.south32.net/docs/default-source/general-library/corporate-governance/2019/south32-code-politica-de-hablar-en-ingles.pdf?sfvrsn=c4ed4d1d_3, págs. 11. 42

Apéndice H – Enfoque en la industria de recursos y energía de Australia

El sector minero sigue siendo un importante contribuyente a la economía de Australia, representando alrededor del 14% del PIB en 2022, y se prevé que los ingresos por exportaciones de recursos y energía asciendan a 459 mil millones de dólares australianos en 2022-23.¹⁰⁷ Si bien la importancia de dichas empresas de recursos y energía para la economía australiana es indiscutible, esas empresas también dependen en gran medida del acceso a la tierra para realizar sus operaciones, que está controlado por los gobiernos federales y locales gobiernos.

Según un análisis del Centro para la Integridad Pública de los datos informados por los donantes a la Comisión Electoral Australiana (AEC) para el período 1999-2019, se identificó a la industria de los recursos y la energía como el mayor contribuyente individual a las donaciones políticas y los pagos declarables.¹⁰⁸ Se descubrió que las empresas de la industria de los recursos y la energía ejercían influencia tanto a nivel de empresa individual como a través de asociaciones industriales.

Al examinar el registro de las reuniones de las partes interesadas y las teleconferencias sobre el proyecto de ley de derogación del impuesto al carbono, se observa una fuerte correlación entre las empresas que donan cantidades considerables de dinero y sus oportunidades de participar en los debates sobre el proyecto de ley.¹⁰⁹ Rio Tinto Por ejemplo, se unieron en seis ocasiones, mientras que Glencore y Santos lo hicieron en dos. Estas empresas también estuvieron representadas en varias ocasiones adicionales a través de asociaciones comerciales como el Consejo Empresarial de Australia y el Consejo de Minerales de Australia, así como otros grupos. En cambio, las ONG solo participaron en una ocasión.

El Centro para la Integridad Pública destaca que esas “enormes cantidades donadas por un sector cuya existencia depende de la emisión de permisos gubernamentales son altamente problemáticas para los promotores Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital inmobiliarios que tienen prohibido hacer donaciones políticas en Australiana y Queensland”,¹¹¹ pero no existen prohibiciones similares para las empresas de recursos y energía, ni a nivel federal ni estatal, a pesar de la naturaleza comparable de sus negocios.

¹⁰⁷ Gobierno de Australia – Departamento de Industria, Ciencia y Recursos – Oficina del Economista Jefe (2022), Recursos y Energía Trimestral, diciembre de 2022, <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2022-12/resources-and-energy-quarterly-december-2022.pdf>, págs. 6-7.

¹⁰⁸ Centro para la Integridad Pública (2021), Donaciones políticas de la industria y pagos declarables: estudio de caso: La industria de los recursos y la energía, <https://publicintegrity.org.au/wp-content/uploads/2021/01/Industry-briefs-resource-and-energy-companies-FINAL-UPDATED.pdf>, pág. 1.

¹⁰⁹ Ibíd., pág. 15.

¹¹⁰ Ibíd., pág. 2.

¹¹¹https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Guías_rápidas/Estados_que_financian_las_elecciones.

Las importantes donaciones políticas realizadas por la industria de recursos y energía plantean inquietudes sobre la integridad del proceso democrático y la confianza pública. Es necesario ampliar la divulgación, ya sea voluntaria u obligatoria, sobre las actividades de cabildeo de empresas y asociaciones del sector con fines políticos para promover la transparencia en los procesos de consulta legislativa y toma de decisiones. Esta mayor transparencia permitirá a los accionistas emitir juicios informados y abordar el riesgo de una consideración desigual de las partes interesadas en el proceso de formulación de políticas.

Apéndice I – Diferentes estados y territorios, diferentes requisitos en Australia

En Australia, los requisitos legales en materia de contribuciones políticas difieren considerablemente entre el nivel federal y el estatal. Los enfoques adoptados por los estados y territorios australianos para abordar la gobernanza en materia de contribuciones políticas también varían. Las dimensiones que abordan los distintos requisitos abarcan desde la aplicación de diferentes umbrales para activar las obligaciones de divulgación obligatoria, la introducción de límites a las donaciones y la especificación de requisitos de puntualidad, hasta la prohibición de que ciertos representantes del sector realicen donaciones políticas.

Nueva Gales del Sur tiene el mayor número de industrias clasificadas como "donantes prohibidos", ya que el estado prohíbe las donaciones políticas de los promotores inmobiliarios y las industrias del tabaco, los juegos de azar y las bebidas alcohólicas.¹¹² Sin embargo, cuando se tienen en cuenta la puntualidad, los topes de donación, los umbrales de divulgación y la obligación de divulgación adicional durante los períodos electorales, Queensland puede considerarse el estado con las leyes de donaciones políticas más estrictas.¹¹³ En Queensland, las donaciones políticas deben divulgarse en un plazo de siete días, tanto durante las elecciones como en los períodos no electorales; el umbral de divulgación es de 1000 dólares australianos; y las donaciones tienen un límite de 4000 dólares australianos. En comparación, a nivel federal, el umbral de divulgación era de en el año fiscal ~~2020-21~~¹¹⁴ dólares australianos en ¹¹⁴; la divulgación se requiere solo anualmente; y no hay topes de donaciones.

En un escenario en el que la Compañía X quisiera donar AU\$3,000 a un partido político en Queensland, el monto de la donación tendría que ser revelado a la Comisión Electoral de Queensland por el receptor dentro de siete días. A nivel federal, no se requeriría ninguna divulgación ya que está por debajo del umbral especificado. En un escenario alternativo en el que la Compañía Y quisiera donar AU\$100,000 cada uno tanto al Partido Laborista como a la Coalición, sería ilegal hacerlo en Queensland, pero la donación podría hacerse a nivel federal, siempre y cuando se revele en las Declaraciones de Donantes presentadas ante la AEC una vez al año. Sin embargo, este ciclo anual de informes a nivel federal puede llevar a informes retrasados, lo que puede generar inquietudes sobre la influencia política corporativa, especialmente durante los períodos electorales.¹¹⁵ Las reglas divergentes sobre las contribuciones políticas dentro de Australia pueden dar lugar a que las contribuciones políticas sean aceptables en algunas jurisdicciones e ilegales en otras.

¹¹²https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp

¹¹³[Guías rápidas/EstadosDeFinanciamientoDeElecciones.](#)

¹¹⁴ El Centro para la Integridad Pública (2022), Arrojando luz sobre el financiamiento político para las próximas elecciones federales, <https://publicintegrity.org.au/wp-content/uploads/2022/02/Hidden-money-2021.docx.pdf>, pág. 3.

¹¹⁵ https://www.aec.gov.au/parties_and_representatives/public_funding/threshold.htm.

115 Griffiths y Emslie (2022), 177 millones de dólares fluyeron a los partidos políticos australianos el año pasado, pero los principales donantes pueden ocultarse fácilmente, <https://theconversation.com/177-million-flowed-to-australian-political-parties-last-year-but-major-donors-can-easily-hide-176129>.

Estas discrepancias normativas pueden generar confusión para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones y dificultar la divulgación sistemática y comparable. Un enfoque cohesivo en la regulación de las donaciones políticas mejorará la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando la igualdad de condiciones y promoviendo la confianza pública en el proceso democrático.